CUADERNOS DE No 29

EL SOCIALISTA Centroamericano

2.00 Pesos Centroaméricanos

NICARAGUA.- ¿REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA O REFORMA DE LA DICTADURA?

DECLARACIONES DEL PARTIDO SOCIALISTA CENTROAMERICANO

LOS CUADERNOS DE "EL SOCIALISTA CENTROAMERICANO" son publicados bajo la responsabilidad del **PARTIDO SOCIALISTA CENTORAMERICANO (PSOCA).**

"Nicaragua: ¿Revolución democrática o reforma de la dictadura?"

Primera Edición

Diseño y Diagramación: Antonio Fonseca

Portada: Mario Bermudez

PSOCA Editorial®

Centroamérica, 30 de Abrilo del 2019

Presentación

Este Cuaderno de **El Socialista Centroamericano** contiene nueve Declaraciones del **Partido Socialista Centroamericano (PSOCA),** que sintetizan el análisis y la política que los socialistas centroamericanos impulsamos a raíz de las movilizaciones estudiantiles de abril del 2018, las que encendieron la llama de la insurrección popular contra el gobierno Ortega-Murillo en Nicaragua.

Las Declaraciones están ordenadas cronológicamente, abarcando el análisis en las diferentes fases de la lucha revolucionaria en Nicaragua: movilizaciones estudiantiles, represión y masacre, insurrección popular, movilizaciones en casi todas las ciudades de Nicaragua, formación de la **Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD)** y la **Articulación,** convocatoria y fracaso del primer Dialogo Nacional, represión a las marchas, ofensiva militar contra los tranques y barricadas, aplastamiento de la insurrección desarmada, terror contrarrevolucionario, paros nacionales a cuenta gotas, retroceso de las movilizaciones, encarcelamiento y procesamiento penal de los luchadores estudiantiles y populares, resistencia popular contra la brutal represión de la dictadura, nuevas negociaciones, sanciones del imperialismo norteamericano, etc.

Estas Declaraciones del PSOCA dibujan las líneas de análisis general que explican la complicada situación de postración del movimiento de masas, producto de las continuas masacre y represión sistemática de la dictadura orteguista. A través de una serie de conspiraciones y maniobras políticas, los principales grupos empresariales y la oligarquía financiera de Nicaragua, apoyados por la administración Trump, después del aplastamiento de los tranques y barricadas, una vez que las masas populares fueron obligadas a retroceder, impulsan a través de la ACJD, discuten y planifican con Daniel Ortega y Rosario Murillo, la reforma controlada de la dictadura.

Salvo que se produzca un nuevo levantamiento popular, el

objetivo central de los cambios democráticos que impulsaron los estudiantes universitarios, y que muchos de ellos pagaron con su sangre, se aleja cada día más. Ahora lo que está en agenda de discusión son las elecciones anticipadas, es decir, los empresarios pretenden canalizar el descontento social hacia la institucionalidad existente, previa aplicación de las reformas electorales impulsadas por la **Organización de Estados Americanos (OEA)** con la aprobación de la propia dictadura.

Hemos llegado a un punto de encrucijada de la lucha democrática iniciada con la rebelión estudiantil de abril del 2018: forzada por la revolución democrática en curso, que se encuentra todavia viva pero en agonía, la dictadura ha aceptado a regañadientes, no sin resistencias, amenazada por posibles sanciones económicas de Estados Unidos, impulsar su propia reforma, lo que en la práctica significaría el establecimiento de un régimen orteguista con algunos cambios democráticos, pero conservando el aparato represivo que masacró a los estudiantes y al pueblo. Cualquier reforma democrática que pretendan impulsar es tan solo un subproducto de la lucha revolucionaria frustrada.

Esta es la dura realidad actual. Para cambiarla, necesitamos hacer un balance de todo lo ocurrido, aprender de los errores, asimilar las experiencias. Los empresarios han logrado dar un golpe de timón porque, a pesar de la lucha heroica de las masas, en Nicaragua no existía una dirección revolucionaria que les hiciera contrapeso. La principal enseñanza es que debemos construir una nueva alternativa política. Desde ya, los socialistas centroamericanos nos apuntamos a trabajar en unidad con todos aquellos sectores que estemos dispuestos a derrotar los planes de reforma controlada de la dictadura, hasta lograr el triunfo de la revolución democrática que convoque a una **Asamblea Nacional Constituyente libre y soberana** que reorganice el Estado de Nicaragua en beneficio de las grandes mayorías.

Centroamérica, 30 de abril del 2019

Victoriano Sánchez

I.-

VIVA LA LUCHA DE LOS ESTUDIANTES: ¡PARO NACIONAL DE 24 HORAS PARA DEROGAR LAS REFORMAS INCONSULTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL!

La situación en Nicaragua ha sufrido un giro dramático, con las ultimas movilizaciones juveniles contra el gobierno sandinista. En los últimos 12 años, bajo el prolongado segundo gobierno de Daniel Ortega (2007-2018), de manera gradual y sistemática se ha instaurado un régimen bonapartista que ha mantenido un absoluto control sobre el movimiento de masas, prohibiendo manifestaciones independientes, reprimiendo las marchas campesinas contra el canal interoceánico, acosando a los ONG, prohibiendo y reprimiendo las huelgas de los trabajadores.

Para consolidar su régimen, Daniel Ortega ha privilegiado la relación con los empresarios del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), elevando a rango constitucional la política de "diálogos y consensos". Los reiterados fraudes electorales han provocado el rechazo de la mayoría de la población, pero el descontento social se había convertido en apatía y sumisión. Pero esta situación de desmovilización social parece haber llegado a su fin.

El primer gran síntoma: la repuesta juvenil al incendio de la Reserva Indio-Maíz

El incendio ocurrido en la reserva forestal Indio-Maíz, en la costa caribe sur de Nicaragua, reflejó la enorme desconfianza de los jóvenes en relación a las declaraciones del gobierno. Rosario Murillo, vicepresidenta y esposa de Daniel Ortega, en sus acostumbradas y aburridísimas letanías diarias, minimizó el incendio y el daño ambiental. El principal motivo de desconfianza de los jóvenes residía en el hecho que el incendio se produjo en las cercanías del territorio donde

supuestamente se construirá el canal interoceánico, y era interpretado como la fase preparatoria de las obras del canal.

Un grupo de 300 estudiantes de la Universidad Centroamericana (UCA), --la misma universidad jesuita que mantuvo una estrecha alianza con la dirección del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) durante la revolución (1979-1990)— de manera espontánea, con pancartas improvisadas, intentó marchar el pasado jueves 12 de abril hacia la Asamblea Nacional, a demandar acciones reales de protección al medio ambiente. La marcha fue bloqueada por una marcha paralela montada por la Juventud Sandinista 19 de Julio (JS-19), que se ha convertido en la principal fuerza de choque del gobierno conta cualquier intento de movilización independiente.

Para evitar la confrontación, la marcha de estudiantes de la UCA tomó otro rumbo, y terminó dispersándose. Al final, el incendio de la reserva Indio-Maíz fue controlado por la propia naturaleza, pero la situación ya no era la misma. Se había producido un nuevo intento de movilización independiente de los jóvenes, la conciencia estaba cambiando rápidamente.

Segundo gran síntoma: rechazo juvenil a las reformas al INSS

La última movilización juvenil independiente se produjo en el año 2013 con el movimiento "#OcupaINSS", que se constituyó como mecanismo de solidaridad con los ancianos que se habían tomado las instalaciones del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) demandando el otorgamiento de la pensión reducida.

El movimiento "#OcupaINSS" fue salvajemente reprimido, muchos de sus dirigentes encarcelados, sus vehículos fueron confiscados y desaparecidos, provocando una nueva fase desmoralización y desmovilización.

Por esas ironías de la historia, cinco años después, el tema del INSS y las pensiones volverían ser el gran motivo de descontento contra el gobierno de Daniel Ortega. El pasado martes 17 de abril, Roberto López, presidente del INSS, -- sin consultar a las centrales obreras, sindicatos y trabajadores--, dio a conocer las reformas que de manera unilateral implementaría el gobierno sandinista: aumento en 0,50 puntos en la cotización de los trabajadores; aumento en la cotización de los empleadores de 12% a 13,5%; disminución de 37,5% a 30% de

la base de cálculo para el otorgamiento de nuevas pensiones (en 2013 había sido reducida del 40% al 37,5%); disminución de 15% a 13,5% en las asignaciones familiares; las cotizaciones al seguro facultativo integral aumentarían hasta 22.25% y 14% para el IVM; la creación de una deducción del 5% de los montos de las pensiones de vejez, invalidez e incapacidad, que tendría un efecto retroactivo. La resolución del Consejo Directivo del INSS se convirtió en el decreto ejecutivo No 03-2018, firmado por el presidente Daniel Ortega

Aunque el Estado como principal empleador aumentaría su aportación, estas nuevas reformas al INSS golpean únicamente a los trabajadores y pensionados, debido a que el aumento de la cotización patronal es deducible de la declaración anual del Impuesto sobre la Renta (IR), conforme lo establecido en el articulo 39, numeral 5, de la Ley de Concertación Tributaria, vigente desde diciembre del 2012. Los empresarios del COSEP no han salido perjudicados en las reformas del 2013 y 2018, su descontento se debe a que ellos aspiran a manejar los fondos del INSS, sea por la vía de privatización de las pensiones o por la vía de una mayor incendia en la privatización de los servicios del INSS a través de las empresas medicas previsionales.

La chispa que ha encendido el descontento social

La reactivación del movimiento de estudiantes de la UCA se produjo el viernes 13 de abril, cuando increparon y rodearon al diputado Edwin Castro, jefe de la bancada sandinista en la Asamblea Nacional, y también profesor de derecho constitucional, por el tema del incendio a la reserva Indio-Maíz. El descontento continuaba.

Los estudiantes de la UCA organizaron un acto de solidaridad con los pensionados, para el día miércoles 18 de abril, haciendo un mitin en la entrada de la UCA, en el centro de Managua. La respuesta del gobierno no se hizo esperar. Fuerzas de choque de la JS-19, transportadas en vehículos de los ministerios, atacaron con palos y piedras a los estudiantes de la UCA, obligándolos a replegarse al interior del campus universitario. La JS procedió a incendiar la nueva fachada de la UCA, manteniendo por varios el acoso y la violencia contra los estudiantes.

La mayoría de los estudiantes no cotizan al seguro social. Oponerse a las reformas del INSS refleja el enorme descontento juvenil y las ganas de pelear contra las decisiones inconsultas del gobierno de Daniel Ortega. El ataque violento y el incendio de la fachada de la UCA causó una tremenda conmoción entre todos los sectores sociales. El

tema de la seguridad social involucra a más de un millón de afiliados al INSS y a sus familiares. La solidaridad popular rodeo a los estudiantes de la UCA, que han sido el destacamento de vanguardia juvenil en la lucha democrática.

Al día siguiente, jueves 19 de abril, el gobierno hizo una maniobra para calmar el descontento: organizó una marcha de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), organismo controlado por el sandinismo desde los años 70 del siglo XX, en conmemoración de Roberto González, estudiante asesinado en la lucha a favor del 6% en el año 1999, bajo el gobierno de Arnoldo Alemán.

El objetivo era movilizar a los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), una universidad estatal, contra los estudiantes de la UCA, una universidad privada. Al final, al no poder movilizar a UNEN, el gobierno tuvo que montar una marcha, bastante reducida, con empleados públicos, en la llamada "plaza de las victorias", reflejando la enorme erosión social que ha sufrido el gobierno de Daniel Ortega.

Intensa jornada de lucha el jueves 19 de abril

Durante muchos años, los becarios de la UNAN han sido la principal fuerza de choque de la UNEN. La maniobra de organizar una marcha el 19 de abril, no funcionó porque los estudiantes de las universidades públicas, Universidad Nacional Agraria (UNA), Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y la propia UNAN, iniciaron movilizaciones y tomas en solidaridad con la lucha contra las reformas al INSS.

Los estudiantes de la UNA libraron una batalla campal contra los antimotines en la carretera norte, frente a las instalaciones. Los estudiantes de la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI), cuyos dueños son la Convención Bautista, también iniciaron protestas frente a sus instalaciones.

Las movilizaciones se generalizaron en todo el país. La lucha comenzó en la UCA, una universidad que agrupa a sectores de clase media, pero que también tiene a miles de estudiantes de origen popular que son beneficiados con los fondos del 6%. Y después se generalizó a las universidades públicas y a los sectores populares.

Se produjeron enormes manifestaciones y enfrentamientos con las fuerzas de choque sandinistas (los "motorizados") en la ciudad

de León, baluarte histórico del sandinismo. Las escenas de violencia de los motorizados contra los estudiantes y los pocos pensionados, enardecieron los ánimos. En Masaya, en el barrio indígena de Monimbó, otro antiguo bastión del FSLN, quienes se oponen a las reformas del INSS se enfrentaron a palos, piedras y morterazos contra las fuerzas de choque del sandinismo. Lo mismo ocurrió en la ciudad de Matagalpa, donde se produjo una masiva movilización frente a la Catedral. En Estelí y Jinotega también se produjeron movilizaciones. En Granada, una ciudad tradicionalmente conservadora, se produjo una enorme movilización frente a la Catedral.

Los enfrentamientos ya produjeron tres muertos: el estudiante Darwin Manuel Urbina y el policía Hilton Rafael Manzanares, muertos en las inmediaciones de la UPOLI, y un activista sandinista muerto en Tipitapa, así como varios heridos graves por las cargas de las fuerzas de seguridad del Estado con apoyo de los grupos de choque del sandinismo.

¿Quien dirige las movilizaciones?

El gobierno, a través de su portavoz Rosario Murillo, ha dicho que se trata de acciones vandálicas de pequeños grupos de derecha, que son los que provocan violencia, y que los sandinistas han tenido que defenderse. ¡Mentiras!

El gobierno ha limitado el derecho de manifestación, utilizando las tropas antimotines de la Policía Nacional para disolver las movilizaciones, ha bloqueado la señal de cable de cuatro televisoras independientes (canales 12, 23, 51 y 100% Noticias), restringiendo las libertades democráticas. Solo el canal 12 opera como televisión abierta. Ha utilizado las "turbas" o fuerzas de choque, para atacar las movilizaciones independientes de los jóvenes.

En muchos casos las movilizaciones han sido espontaneas, en otros casos fueron organizadas por los organismos de la sociedad civil, y en el trascurso de las movilizaciones se ha sumado gente de sectores populares. Estamos ante un fenómeno masivo de rebelión juvenil o estudiantil, que refleja el enorme descontento popular acumulado en estos 12 años de gobierno de Daniel Ortega. El detonante ha sido, primero, la negligencia gubernamental por el incendio de la reserva Indio-Maíz, y enseguida ha sido la lucha contra las reformas al INSS. Estos dos temas no tienen relación directa con la situación particular de los estudiantes, pero no se debe perder de vista que los jóvenes son quienes mas resienten los efectos del estancamiento económico,

falta de empleos y de oportunidades. Así como ocurrió con la lucha contra el somocismo, los jóvenes vuelven a ser el destacamento de vanguardia en la lucha contra el régimen bonapartista instaurado por Daniel Ortega.

Los partidos de derecha no dirigen nada, aunque tratan de pescar en rio revuelto. Es importante recalcar que los partidos de derecha están sumamente debilitados, desprestigiados, y que no son ellos quienes conducen estas movilizaciones que se han convertido en semi estallido social en todo el país. Estas movilizaciones tienen como destacamento de vanguardia a los jóvenes.

Todo parece indicar que la masividad de la lucha juvenil se debe a que un sector importante de la base sandinista se ha sumado a las movilizaciones, y ha impuesto métodos revolucionarios de lucha. En las marchas contra las reformas al INSS hemos visto quemar banderas del FSLN, pero también hemos visto a personas que marchan protestando, pero enarbolando también las banderas del FSLN. La participación de trabajadores o jubilados ha sido mínima.

La preocupación de los empresarios

Las movilizaciones de protestas no se iniciaron porque el gobierno rompió la política de "diálogos y consensos", como pretenden hacer creer los empresarios del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), sino, por el simple hecho, que los jóvenes y la población perciben que con las últimas reformas se pretende ocultar los manejos turbios de las finanzas del INSS, que han enriquecido a la burguesía sandinista, además de perjudicar a trabajadores y pensionados.

El COSEP y la totalidad de las cámaras empresariales han hecho llamados a reanudar el dialogo y los consensos. Temen profundamente que con estas movilizaciones se esté gestando una revolución democrática que ponga fin al gobierno de Daniel Ortega, el gobierno que ha garantizado altas tasas de ganancias en los últimos 12 años.

Centralizar la lucha: paro nacional de 24 horas

Una característica de la lucha actual es la dispersión y la espontaneidad, lo que favorece las maniobras del gobierno contra los jóvenes.

Por ello, desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llamamos a la solidaridad activa de los estudiantes de Centroamérica hacia los jóvenes en Nicaragua. Al mismo tiempo aconsejamos luchar por lo siguiente:

1.-¡Derogación inmediata del Decreto No 03-2018 que contiene las reformas inconsultas al Reglamento de la Ley de Seguridad Social!

2.- Desde las diferentes universidades en lucha, llamamos a los jóvenes a organizarse en comités con el objetivo de establecer un Coordinadora Nacional de Estudiantes en Lucha. Llamamos a las estructuras de UNEN a no ser utilizados como fuerzas de choque contra nuestros hermanos y hermanas en lucha.

3.- ¡Defendamos el derecho democrático a marchar y movilizarnos libremente!

4.- ¡Abajo la represión de las tropas antimotines de la Policía Nacional! Llamamos a los policías a no reprimir ni disparar contra el pueblo en las calles.

5.- Organicemos Brigadas de Autodefensa ante los ataques de "motorizados" y fuerzas de choque de la JS-19 y del partido FSLN.

6.- Llamamos a las centrales obreras y sindicatos a romper con esta directriz del gobierno sandinista, porque solo perjudica a trabajadores y pensionados.

7.- El INSS necesita una urgente reforma, esto es innegable, pero cualquier reforma a la seguridad social debe ser consultada y aprobada por los trabajadores (y no por los burócrata sindicales como Gustavo Porras), y debe contemplar, entre otros aspectos, la absorción y nacionalización de las empresas medicas previsionales privadas para fortalecer las coberturas del INSS, el control de los fondos del INSS por parte de los afiliados, que el gobierno pague la deuda histórica con el INSS, que los patrones aporten más ya que ellos gozan de exoneraciones fiscales, etc.

8.- Para garantizar la victoria de esta lucha democrática, llamamos a organizar un Paro Nacional de 24 horas, desde los sindicatos, centrales obreras y los comités de lucha estudiantiles.

Centroamérica, 20 de abril del 2018.
Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)
Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)

II.-

VICTORIA DE LA LUCHA ESTUDIANTIL Y POPULAR…. ¿Y AHORA QUÉ SIGUE?

Desde el 17 hasta el domingo 22 de abril, Nicaragua vivió una intensa jornada de lucha, cuya vanguardia fueron los estudiantes universitarios que se oponían a las reformas inconsultas a la seguridad social, aprobada unilateralmente por el gobierno sandinista. Las jornadas de lucha acapararon la atención de la prensa internacional. La olvidada Nicaragua volvió a ser noticia.

Renacen las tradiciones revolucionarias

Después de varios años de reacción, impuestos por la derrota de la revolución en 1990, y específicamente por el régimen bonapartista de Daniel Ortega a partir del año 2007, que prohíbe cualquier tipo de movilización o manifestación independientes, las tradiciones revolucionarias de la época de lucha contra la dictadura somocista volvieron a resurgir en una generación de jóvenes que nació y se desarrolló en el periodo posterior a 1990.

La lucha contra las reformas a la seguridad social comenzó con un intento de manifestación de protesta por parte de los estudiantes de la Universidad Centroamericana (UCA), la que fue brutalmente reprimida por las fuerzas de choque paramilitares de la llamada Juventud Sandinista (JS-19). Inmediatamente, se generó una ola de solidaridad y de movilizaciones en contra de los agresores.

Debido a que el gobierno sandinista siempre ha impedido las marchas de protesta y las luchas sociales, el derecho a manifestarse se convirtió rápidamente en un enfrentamiento violento en las calles. En esta pelea, la nueva vanguardia estudiantil retomó los métodos de lucha que el sandinismo utilizó en la época de lucha contra el somocismo. Con pañuelos y capuchas en el rostro, piedras en mano, montando barricadas y utilizando morteros, no solo enfrentaron la embestida

de los grupos para militares del gobierno (jefeados por la JS-19 y los alcaldes de cada municipio) sino a las tropas antimotines de la Policía Nacional.

Una de las consignas que renació, y que viene de la época heroica del FSLN, es aquella famosa pronunciado por Leonel Rugama en 1970 ("que se rinda tu madre") al morir solo, en combate contra 300 guardias somocistas. Esa misma consigna resonaba en todas las barricadas y recintos universitarios. Se volvieron a escuchar canciones e himnos revolucionarios de la época de la lucha contra el somocismo. Los estudiantes y un sector importante de las masas populares recuperaron la memoria y las tradiciones que habían sido sistemáticamente borradas después de 1990. Los estudiantes comienzan a discutir la necesidad de una nueva revolución.

Un semi insurrección popular

Al no existir en Nicaragua los mecanismos por medio de los cuales las masas pueden expresar o disipar su descontento, el resultado fue que se produjo un estallido social --por un aspecto tan elemental como el derecho a marchar y protestar--, que tuvo como conducción a los jóvenes universitarios.

Esta vanguardia estudiantil no peleaba sola, era apoyada por la población cercana a los diferentes recintos universitarios. La lucha comenzó en la UCA, una universidad privada, con estudiantes provenientes de la clase media, pero rápidamente se generalizó a las universidades públicas, con estudiantes de origen plebeyo y popular, que abarcó incluso y también aquellas universidades privadas que reciben recursos del 6%, como es el caso de la UPOLI.

La generalización de la lucha a casi todos los departamentos, dispersó y debilitó a las fuerzas de la Policía Nacional, la que concentró sus ataques en puntos neurálgicos como la Catedral de Managua, la Universidad Nacional de Ingeniera (UNI), la Universidad Nacional Agraria (UNA) y la UPOLI. En los hechos se produjo paralización casi total de la administración pública. Muchos pequeños y medianos negocios cerraron sus puertas por temor a la inseguridad en las calles.

Las movilizaciones de solidaridad estallaron en casi todas las cabeceras departamentales y hasta en los municipios más alejados, reflejando un vuelco de las masas en contra de la represión del gobierno sandinista.

En una semana, la represión selectiva de la Policía Nacional y de francotiradores del Ejercito Nacional (EN), produjo más de 30 muertos. Los estudiantes eran asesinados a balazos, cuando la vanguardia estudiantil solo estaba armada del coraje y la voluntad de lucha.

El gobierno bloqueó la señal de cable de cuatro canales de televisión, pero los estudiantes y la población se informaban por las redes sociales, donde se podía ver las movilizaciones, escuchar los disparos y ver con dolor e impotencia el momento en que muchos compañeros morían por las balas asesinas.

Si algo caracterizó las recientes jornadas de lucha fue la dispersión en los planteamientos y demandas, así como la descentralización organizativa. Como era de esperarse, los centros de lucha estaban descoordinados unos de otros. La lucha en un departamento no tenía conexión con los otros. Lo único que mantenía cierto grado de unidad y centralización era la información y contrainformación que circulaba por las redes sociales, las que se convirtieron en un escenario de lucha mediática entre el gobierno sandinista y las masas en lucha.

Incendios, violencia de masas y saqueos

Al no haber espacio para las protestas pacíficas, el descontento acumulado generó, de igual manera, una repuesta violenta contra quienes agredían y disparaban contra los estudiantes en lucha. La respuesta airada de las masas en las calles se centró contra los "arboles de la vida", una espantosa estructura metálica, adornada con luces led, que están sembrados en Managua, y que se convirtieron en símbolos de la nueva ideología imperante (paz, amor, buen gobierno cristiano, socialista y solidario, etc.), cuya máxima exponente teórica es Rosario Murillo.

Muchos "arboles de la vida" fueron quemados y derribados. El descontento de las masas también se centró contra ciertas alcaldías, porque los alcaldes eran quienes jefeaban las fuerzas de choque, que agredían y disparaban contra los manifestantes. Hubo conato de incendio en la alcaldía de Granada, fue quemada la sede del Centro Universitario de la Universidad Nacional (CUUN) en León, en otros casos los incendios fueron abortados.

En su discurso del domingo 22 de abril, Daniel Ortega, culpó de las muertes y la violencia a las pandillas, pero esta afirmación se contradice con discursos anteriores donde afirmaba que en Nicaragua no existen

maras o pandillas, porque es el país más seguro de Centroamérica". Sin lugar a dudas, dentro de la movilización de estudiantes y pobladores se mezclaron elementos lúmpenes, que quieren sacar provecho de la crisis.

En términos generales, en la lucha prevaleció el orden y el respeto entre los miembros de las comunidades. Los saqueos comenzaron el día domingo 22 de abril por la mañana, cuando la Policía Nacional se retiró de ciertos lugares. Todo indica que eran sectores orientados por el sandinismo, con el objetivo de desacreditar las protestas y de atemorizar a la clase media que se rebelaba contra el gobierno sandinista. La amenaza de saqueos generalizados obligó a comerciantes del Mercado Oriental y Mercado de Mayoreo a montar grupos de vigilancia armada, para evitar la destrucción de sus negocios. Incluso, se llegó al extremo que los mismos pobladores detenían a los saqueadores, requisaban las mercaderías, y las devolvían a los supermercados y negocios.

¿Un "golpe blando" del imperialismo?

Algunos medios de comunicación en manos del FSLN, han calificado, entre dientes, en conjunto con partidos chavistas como el PSUV de Venezuela y otros corifeos, que las heroicas jornadas de lucha estudiantil y popular en Nicaragua fueron una intentona de "golpe blando", organizado por el imperialismo norteamericano y la derecha local.

Estos tipos de afirmaciones subliminales, confirman que la dirigencia sandinista se ha alejado del pueblo y no comprende el origen de la rebelión popular. En publico se dan golpes en el pecho y fingen reconocer errores, pero en realidad mantienen la misma posición de aplastar cualquier intento de movilización independiente. Es una reafirmación del reiterado desprecio al descontento de las masas populares.

En Nicaragua la cúpula militar y policial está conformada por cuadros sandinistas que son, por el momento, fieles al presidente Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos, el pasado 22 de abril, a través de un comunicado, reflejó una posición cautelosa por parte de la administración de Trump, al afirmar: "(…) Condenamos la violencia y el uso excesivo de la fuerza por la Policía y otros contra civiles que ejercitan su derecho constitucional a la libertad de expresión y de asamblea (…) Estados Unidos llama a un diálogo amplio que

involucre a todos los sectores de la sociedad para resolver el conflicto actual, restaurar el respeto a los derechos humanos y lograr un mejor futuro más democrático para todos los nicaragüenses".

Posteriormente, por si quedaban dudas sobre cuál es la política de Estados Unidos hacia Nicaragua, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, declaró que Trump "condena la violencia y la represión propagada por el gobierno de Nicaragua", dijo la Casa Blanca (…) y se suma a los llamados de la comunidad internacional a favor de un diálogo amplio y apoya al pueblo de Nicaragua, que anhela la libertad de expresión política y verdaderas reformas democráticas que tanto se merece"

Entonces, ¿a que "golpe blando" se refieren los chavistas y reformistas de toda calaña? Coincidencia o no, Daniel Ortega reafirmó su posición de convocar a un dialogo amplio con los empresarios del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y la Iglesia Católica, para discutir la crisis del seguro social. ¿Acaso el "golpe blando" lo esta dando el propio Daniel Ortega, aplicando la política del Departamento de Estado y de la Casa Blanca?

Una importante victoria de las masas

El anuncio de Daniel Ortega, el pasado domingo 22 de abril, de que el Consejo Directivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) había revertido la Resolución 1317, que dio origen al Decreto Ejecutivo No 03-2018, constituyó, sin lugar a dudas, un gran triunfo de la lucha estudiantil y popular. Pero este triunfo tuvo un alto costo: más de 30 compañeros asesinados, 121 heridos, centenares de detenidos que ya fueron liberados, pequeños negocios saqueados, etc.

Los grandes ausentes de estas jornadas de lucha han sido los trabajadores organizados, han peleado como individuos, no como clase organizada, lo que representa una enorme debilidad, y da un amplio margen de maniobra al gobierno sandinista. Si los trabajadores no avanzan en su organización sindical, y si los jóvenes universitarios no crean nuevas y poderosas organizaciones estudiantiles democráticas, esta victoria obtenida puede ser revertida en cualquier momento, porque el régimen bonapartista de Daniel Ortega, aunque debilitado, todavía permanece intacto.

El dialogo que ya se esta convocando, no es para discutir los problemas de la seguridad social con los estudiantes en lucha, sino para

negociar con los empresarios, con la bendición de la Iglesia Católica. Con justa razón, un sector de la vanguardia estudiantil ha criticado la convocatoria de esa mesa de negociaciones, auspiciada por Estados Unidos, la ONU, la OEA y la Unión Europea

Programa y consignas de lucha

Inicialmente, la lucha comenzó contra las reformas inconsultas a la seguridad social y la solidaridad con los estudiantes de la UCA, pero al calor del enfrentamiento surgieron nuevas consignas, como el cese a la represión, el castigo a los culpables, y consignas más políticas como la depuración del Consejo Supremo Electoral (CSE), planteando incluso la renuncia inmediata de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.

Después del triunfo obtenido, un beligerante sector ha convertido la consigna de la renuncia del matrimonio presidencial en la más importante, incluso por encima de las reivindicaciones propiamente estudiantiles.

El COSEP y la Iglesia Católica pescan en rio revuelto

La marcha del día 23 de abril, realizada en Managua, convocada por el COSEP para llamar a la paz y el dialogo, salió de la rotonda de Metrocentro y terminó frente a la UPOLI, donde se encontraba un combativo sector de estudiantes en pie de lucha. Fue una marcha de decena de miles de personas, muchos de ellos trabajadores de las empresas privadas que dieron la tarde libre. El peso dirigente de la clase media era notorio, pero también muchos sectores populares se sumaron a la convocatoria. Los ausentes fueron los estudiantes en lucha, quienes estaban repeliendo las agresiones de la Policía Nacional.

Las jornadas de lucha se dieron por fuera la conducción e incidencia del COSEP. Estos oportunistas carroñeros lo que hicieron fue montarse en el descontento popular, y utilizar el mismo en la mesa de negociaciones con el gobierno. No debemos olvidar que, en torno al tema de la reforma a la seguridad social, la posición del COSEP es mucho más dura que el plan que el gobierno sandinista pretendió imponer de manera gradual y unilateral. El COSEP ha convocado a movilizaciones para detener los efectos de la reforma tributaria que el Fondo Monetario Internacional (FMI) exige que se aplique y que implica el fin de las exoneraciones fiscales para un importante sector de la burguesía parasitaria.

La crisis ha obligado al gobierno sandinista a reconciliarse con los obispos de la Iglesia Católica, la que ha sido nombrada por Daniel Ortega como mediadora en el futuro dialogo. El COSEP ha aceptado a la Iglesia Católica como "garante".

Comisión de Investigación independiente

La brutal represión de las fuerzas de choque de la JS-19 y de las tropas antimotines de la Policía Nacional y las tropas especiales del Ejército Nacional, así como el asesinato de más de 30 compañeros caídos por balas asesinas, debe ser investigado por una Comisión de Investigación Independiente formada por delegados de las organizaciones defensoras de derechos humanos, sindicatos independientes, delegaciones de los estudiantes en lucha, así como familiares de los afectados, con la finalidad de levantar un informe sobre la violación a derechos humanos.

Los responsables de estas violaciones deben ser enjuiciados y castigados, y los familiares de las victimas deben ser indemnizados por el gobierno sandinista. Lo anterior debe llevar a una depuración de los oficiales involucrados en asesinatos y violación a los derechos humanos.

Que el pueblo decida sobre si Daniel Ortega termina su periodo o no

La demanda de un sector beligerante de estudiantes que exigen la renuncia inmediata de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, es justa y comprensible. Sin embargo, el diario La Prensa aprovecha la oportunidad para exigir lo mismo: "Por primera vez desde el triunfo de la revolución sandinista de 1979, Daniel Ortega y el FSLN han perdido el control de las calles. Esto es un hecho trascendental que modifica el rumbo de la historia nacional. A partir de aquí, Nicaragua ya no podrá ser la misma (..) Los empresarios también deben convocar a un paro nacional. Daniel Ortega ya no tiene capacidad política ni autoridad moral para seguir gobernando. Ortega tiene que salir pacíficamente del poder o tendrá que irse como se fue Somoza (…) En el diálogo nacional, que debería ser mediado y garantizado por la comunidad internacional, al menos por la OEA, se tiene que acordar la salida de Ortega, las garantías de una transición ordenada y pacífica a la democracia y, primordialmente, la convocatoria a elecciones libres y transparentes" (Editorial de La Prensa, 23/04/2018).

La salida que propone La Prensa es profundamente antidemocrática, y refleja intereses diferentes a la exigencia sincera de un sector estudiantil. Como en el pasado, un sector de la burguesía clama por una intervención imperialista que los libere del régimen bonapartista de Daniel Ortega, y nuevamente solicitan la intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA), a pesar que enero del 2017 esta firmó con Daniel Ortega un acuerdo para democratizar gradualmente el régimen político.

Incluso, algunos sectores ya están planteando adelantar las elecciones como en 1990. Mientras no se produzca un paro nacional o una rebelión masiva y generalizada capaz de tumbar al actual gobierno, cualquier salida a la crisis actual, debe ser democrática y sin injerencia del imperialismo norteamericano. La rebelión estudiantil y popular muestra, efectivamente, un deterioro político del gobierno sandinista, pero éste conserva todavía una parte de su base social. Una salida democrática implicaría que el pueblo decida a través de elecciones democráticas, por medio de un plebiscito o referéndum, si Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo permanecen el poder o si tienen que irse.

Pero, para que el pueblo opine, sin riesgo a nuevos fraudes electorales, deben reestructurarse el CSE, y se debe aprobar a lo inmediato una nueva Ley Electoral, que garantice la participación de todas las fuerzas política en igualdad de condiciones.

Por una Coordinadora Nacional Estudiantil

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA), que ha participado hombro a hombro con los miles de estudiantes en rebeldía contra el gobierno de Ortega, llama a la vanguardia estudiantil y de los sectores populares, a aprovechar el receso de la lucha, para iniciar un proceso de discusión democrática, haciendo en balance de las jornadas de lucha, discutiendo en el programa de lucha que debemos enarbolar para democratizar a Nicaragua.

De manera muy especial llamamos a los estudiantes a construir una coordinadora de los comités y brigadas que participaron, para crear una dirigencia nacional que permita coordinar las futuras luchas, que inevitablemente vendrán.

Es hora de luchar por una Asamblea Nacional Constituyente

La rebelión estudiantil y popular se debió, no a una "conspiración imperialista", sino a los constantes atropellos del régimen bonapartista, al hecho que son la clase media y los sectores populares los más duramente golpeados por la política económica neoliberal que aplica que el gobierno sandinista, en beneficio de una reducida cúpula de empresarios.

Es hora de democratizar Nicaragua en beneficio de los más pobres, y esto solo se puede lograr a través de la decisión democrática y mayoritaria del pueblo, reflejada en la convocatoria inmediata de una Asamblea Nacional Constituyente, que elija un gobierno provisional y que redacte una nueva Constitución.

Centroamérica, 24 de abril del 2018

Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)
Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)

III.-

EL GOBIERNO QUIERE RETOMAR LA OFENSIVA: ¡¡HUELGA GENERAL ESTUDIANTIL COMO PRIMER PASO PARA CONVOCAR A UN PARO NACIONAL!!

La situación política en Nicaragua sigue siendo inestable, marcada por una constante represión del gobierno contra las movilizaciones independientes, y por una tenaz resistencia de la vanguardia estudiantil.

Retroceso temporal y desigual después de la masacre

Después de la brutal represión militar de la lucha semi insurreccional, concentrada en los barrios orientales de Managua, los efectos de semejante masacre, ocurrida el 19 y 20 de abril, contra estudiantes y jóvenes desarmados, se ha hecho sentir en todo el país.

Al conocerse la cantidad de muertos, heridos, desaparecidos y capturados, la población ha mostrado un creciente rechazo al gobierno de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. Este rechazo tuvo expresiones masivas con las marchas convocadas por el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y los obispos de la Conferencia Episcopal (CEN) de la Iglesia Católica, el pasado 23 y 28 de abril respectivamente. Pero, salvo estas dos marchas, el descontento ha vuelto a ser pasivo, no ha vuelto a transformarse en acciones generalizadas de masas que pongan en peligro la existencia misma del gobierno y sus instituciones.

El efecto lógico de la brutal represión fue un descenso en la lucha

estudiantil y popular, que comenzó contra las inconsultas reformas a la seguridad social pero que rápidamente se convirtió en una lucha frontal contra el gobierno. La masacre, por un lado, y el hecho que las universidades han suspendido las clases, son los dos factores que han incidido en un retroceso temporal de la lucha estudiantil y popular.

No obstante, algunos focos de resistencia todavía no han sido apagados. Mientras Managua y el conjunto del país regresaban a una tensa calma, algunas protestas y movilizaciones se continuaron produciendo, especialmente en la región oriental que abarca los departamentos de Masaya, Granada, Carazo y Rivas.

El barrio indígena de Monimbó

En momentos en que retrocedía temporalmente la lucha contra el gobierno Ortega-Murillo, el barrio indígena de Monimbó, antiguo baluarte social de la lucha guerrillera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en 1978 y 1979, ha pasado a convertirse, como lo fue en el pasado, en símbolo de la resistencia, pero ahora contra el actual gobierno sandinista.

Este barrio, como toda la zona oriental de Nicaragua, está compuesta por pequeños propietarios y artesanos arruinados económicamente por la política neoliberal que ha impulsado el gobierno sandinista. Las barricadas han vuelto a levantarse en Monimbó, después de la reciente represión policial contra la caravana de solidaridad que viajaba a Niquinohomo, y que fue detenida y disuelta con disparos y gases lacrimógenos a la altura del poblado de Catarina, donde se libró una batalla campal que terminó con la destrucción y el incendio de la oficina del FSLN en esa localidad. Una característica de la actual lucha, es que las masas al ser reprimidas vuelcan su odio contra los símbolos de poder del FSLN.

La pelea por la estatua de Sandino en Niquinohomo

En el poblado de Niquinohomo, lugar donde nació el general Augusto C. Sandino, se libra desde hace días una batalla por los colores de la bandera que la estatua del general Sandino tiene en el cuello. Lo originales colores rojo y negro, verticales, de la bandera que el general Sandino usó (tomada de las huelgas obreras en México y que reflejaban una influencia anarquista) en la gesta libertaria (1927-1934), hace muchos fueron sustituidos por los colores rojo y negro, horizontales, de

la bandera del FSLN.

Este detalle de la posición de los colores pasó desapercibido durante muchos años, hasta que durante las recientes movilizaciones estudiantiles y populares la población de Niquinohomo decidió cambiarlos por los colores azul y blanco de la bandera de Nicaragua. Este cambio en los colores de la bandera de la estatua del general Sandino, refleja el rechazo de la población al apropiamiento que el FSLN ha hecho de la figura de Sandino, un verdadero héroe que lucho militarmente contra la ocupación norteamericana.

Esta batalla campal por los colores de la bandera de la estatua del general Sandino, encierra las contradicciones de la actual lucha por la democratización de Nicaragua. Aunque los colores azul y blanco que pinta la población no reflejan la verdad histórica (la bandera era roja y negra con colores verticales, no horizontales), muestra un rechazo masivo a la utilización que por décadas ha hecho el FSLN de la figura del héroe. Pero la estatua de Sandino no es derribada ni destruida, como ha ocurrido con los "arboles de la vida", sino que la población retoma la figura de Sandino, retoma su lucha por la autodeterminación nacional, y se la arrebata a la manipulación y tergiversación que el FSLN ha hecho de la misma. Por ello, en muchas movilizaciones observamos consignas levantadas y agitadas cuando el FSLN desempeñaba un rol revolucionario en la lucha contra el somocismo, que ahora ha reencarnado bajo nuevas formas en la conducción Ortega-Murillo.

Ilusiones en un Diálogo Nacional que no empieza

Otro factor que ha incidido en el retroceso temporal y parcial de la lucha estudiantil y popular, ha sido la manipulación oportunista del COSEP y de la Iglesia Católica, quienes, al convocar a sendas manifestaciones, tratan de explotar el descontento social, pero para aprovecharlo para sus propios fines.

El 30 de Mayo, los obispos de la CEN emitieron una carta pastoral, que en sus partes medulares, expresa: "(…) el objetivo de este Diálogo Nacional debe de ser "revisar el sistema político de Nicaragua desde su raíz, para lograr una auténtica democracia". Creemos también que el tema de las dolorosas muertes sufridas durante las manifestaciones universitarias, deben de ser esclarecidas a fondo. Hacemos un llamado a los estudiantes universitarios para que terminen de organizarse lo más pronto posible y definan su agenda y a sus representantes. Igualmente, a estar atentos a grupos ajenos al movimiento estudiantil que están actuando agresivamente, sembrando confusión".

Si algo reflejaron las masivas movilizaciones del 23 y 28 de abril, es que, en la mayoría de las masas, salvo la vanguardia estudiantil que sigue peleando sola, existe un sentimiento de que los problemas del país todavía pueden solucionarse por la vía pacífica y a través del diálogo y la negociación. Los obispos de la Iglesia Católica han tenido el olfato de detectar este sentimiento, y ponerse al frente.

Este sentimiento es comprensible y explicable porque las dos guerras civiles vividas (1978-1979) y (1982-1990) produjeron decenas de miles de muertos. Todavía viven quienes combatieron en esas dos guerras. El fantasma de una nueva guerra civil provoca cierto temor. Estas ilusiones se disolverán rápidamente en la medida en que las masas hagan su propia experiencia, y logren vencer esos temores.

Los empresarios cierran filas por los cambios graduales

En gesto inusual, que no se veía desde 1974 cuando todas las cámaras empresariales se rebelaron contra la voracidad de Anastasio Somoza Debayle, ahora la oligarquía financiera agrupada en la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (ASOBANP), los exportadores de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AMCHAM), el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), emitieron un comunicado conjunto, en el que demandaron: "I.- Abrir una investigación independiente y creíble, con la participación de organismos de derechos humanos de reconocida trayectoria, que investigue y ponga ante la justicia a los responsables de los crímenes ocurridos durante las protestas de abril del 2018.(…) II. Reformas al sistema electoral que incluyan la implementación a lo inmediato de las recomendaciones de los informes de la OEA en materia electoral y de partidos políticos, la elección de nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral y la observación electoral independiente, nacional e internacional, para garantizar elecciones libres y transparentes, respetando la voluntad de los nicaragüenses. III. Reformas institucionales que garanticen el estado de derecho, la independencia de los poderes del Estado y la eliminación de la corrupción. IV. Resolver la problemática de sostenibilidad y transparencia del INSS, incluyendo cambios de autoridades, propuestas al diálogo nacional de reformas que den viabilidad financiera a la seguridad social e inicio a lo inmediato una auditoría forense e integral de la institución".

Este programa de los empresarios se ve obligado a reconocer la necesidad de realizar una investigación independiente sobre la masacre cometida por el gobierno de Ortega-Murillo, pero a reglón seguido solicita que se cumpla el Acuerdo con la OEA firmado por Ortega en 2017, y la implementación de cambios al sistema electoral, pero con ello se distancian del clamor de la vanguardia estudiantil que demanda a gritos la renuncia de la pareja presidencial, dejándolos prácticamente solos en la lucha por la verdadera democratización de Nicaragua.

Nicaragua necesita no solo reformas al sistema electoral, sino profundos cambios totales en el sistema político y económico, los que deben realizarse en beneficio de las grandes mayorías.

Algunos sectores de la vanguardia estudiantil mantienen la ilusión que los empresarios del COSEP se sumarán voluntariamente a un Paro Nacional, pero la verdad es que hasta el momento las negociaciones secretas del gobierno y los empresarios del COSEP le han dado oxígeno y margen de maniobra a aquél.

Las hipócritas declaraciones de Mike Pence

La posición de la administración Trump se parece a la de los empresarios nicaragüenses: critican el uso excesivo de la represión, pero en el fondo apoyan la propuesta de cambios graduales, manteniendo la estabilidad y la continuidad del sistema opresivo montado por Daniel Ortega. Las críticas son las excepciones, la regla general es que los cambios se hagan dentro del marco de la OEA.

El lunes 7 de Mayo, Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, en relación a la represión de Ortega, declaró "Estados Unidos condena estas acciones brutales en los términos más enérgicos posibles. Llamamos al gobierno de Ortega a permitir que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ingrese a Nicaragua (…) Nos unimos a las naciones de todo el mundo para exigir que el gobierno de Ortega responda a las demandas del pueblo nicaragüense de una reforma democrática y haga rendir cuentas a los responsables de la violencia (…) El pueblo de Nicaragua merece algo mejor que el recrudecimiento de la represión del gobierno".

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llama a la vanguardia estudiantil a levantar muy en alto la bandera antiimperialista del general Sandino. La lucha por la democratización de Nicaragua será producto de la movilización de masas, o no será. Estados Unidos siempre apoyó

a los dictadores, primero a Somoza y ahora a Daniel Ortega, quien usa lenguaje "antiimperialista" para confundir a sus seguidores sobre la naturaleza de la actual rebelión estudiantil y popular. El imperialismo norteamericano se ve obligado a criticar a Ortega hasta cuando ven a las masas en la calle, luchando. Es una actitud oportunista y manipuladora que debe ser rechazada.

El gobierno intenta recuperar la ofensiva

La posición de los empresarios de negociar reformas graduales, la actitud de la Iglesia de conducir el descontento a la mesa de negociaciones, le ha permitido al gobierno de Ortega-Murillo realizar los primeros intentos de retomar la ofensiva.

A nivel público toda la propaganda gubernamental se refiere a la supuesta lucha por la paz, pero por debajo, los activistas del FSLN corren rumores que se preparan para la guerra, que nunca van a dejar el poder, y que van a reprimir las movilizaciones, como lo acaban de hacer recientemente en Niquinohomo y Catarina.

Al mismo tiempo, mantiene una sucia guerra mediática dentro de las redes sociales, con el clásico método de desinformación y almáganas que mezclan pocos elementos con ciertos con un montón de mentiras.

Convocar a la Huelga General Estudiantil

Después de algunos días de suspensión de clases en las universidades, finalmente el lunes 7 de mayo los estudiantes retornaron a sus recintos, pero lo hicieron en pie de lucha, convocando reuniones y haciendo plantones de protesta contra la represión en los recintos de la UNI, la UNAN en Managua y León.

Las estructuras burocráticas de la pro gubernamental Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), están en crisis. En algunos recintos, los pocos activistas de UNEN se oponen con grupos de choque a las movilizaciones estudiantiles. Estos grupos de choque son fortalecidos con elementos policiales vestidos de civil, y miembros de la JS-19 que trabajan en los ministerios del Estado.

El gobierno Ortega-Murillo trata, con sus fuerzas de choque, de quebrar la voluntad de lucha de los estudiantes que demandan el cese de la represión.

PSOCA

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llamamos a la convocatoria a una Huelga General de Estudiantes, universitarios y de secundaria, como primer paso para la convocatoria de un Paro Nacional, única manera de doblarle el brazo al gobierno de Ortega-Murillo y obligarlo a retroceder. El día lunes 7 de mayo, los estudiantes de la UNAN-Managua se reunieron en asamblea y acordaron parar las clases, y se tomaron los edificios. Horas después, las autoridades declararon suspensas las clases para desmovilizar a los estudiantes.

Los estudiantes de la UNAN-Managua nos muestran el camino a seguir. Por ello, llamamos a la realización de asambleas por cada grupo de clase, a elegir un comité de dirección de cada grupo, a realizar asambleas por escuela o facultad, con el objetivo de conformar una Coordinadora Nacional de Estudiantes en Lucha, en donde las decisiones se discutan democráticamente.

Este renacimiento del movimiento estudiantil encierra el peligro que algunos grupos, considerándose más representativos que otros, intenten imponer posiciones o decisiones al resto. ¡!Basta ya de imposiciones!! Las decisiones deben ser tomadas por mayoría, y organizar los diferentes comités que la huelga necesita para triunfar.

Si algo nos enseñó la semi insurrección de abril, es que para mitigar los efectos de las embestidas represivas de la Policía Nacional y de las fuerzas de choque, se requiere máxima disciplina para defendernos de los ataques violentos.

Llamamos a defender la autonomía universitaria, es decir, la capacidad de decisión de la comunidad universitaria, necesitamos ganar a los profesores y personal administrativo a esta lucha por la democratización de Nicaragua.

La Huelga General Estudiantil debe ser activa, los estudiantes no deben irse a sus casas, sino mantener la ocupación de los recintos universitarios, organizando la logística necesaria para mantener la ocupación de los recintos en manos de los estudiantes en lucha.

Si la Huelga estudiantil se extiende, será un enorme estímulo para que los trabajadores se sumen, y con ello lograríamos una alianza que sería indestructible. Los trabajadores del Estado, y los trabajadores de la empresa privada, debemos discutir las acciones a seguir para brindar solidaridad a la lucha estudiantil.

Debemos exigir el cese de la represión, el castigo a los culpables de la masacre, y luchar por la defensa de las libertades democráticas,

por el derecho a libre movilización, en la perspectiva de convocar a elecciones libres para una Asamblea Nacional Constituyente.

Centroamérica, 7 de mayo del 2018

Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)
Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)

IV.-

LA INSURRECCIÓN DESARMADA Y LAS ILUSIONES EN EL DIALOGO NACIONAL

La situación en Nicaragua continua al rojo vivo. La represión constante del gobierno no logra aplacar la dinámica insurreccional de los estudiantes y los sectores populares que se le suman. La sangre de los caídos se convierte en un aliciente para continuar la lucha. No está permitido retroceder, pero en medio de los enfrentamientos callejeros se oyen voces a favor de una salida pacífica y negociada.

¿Quiénes invocan el "Dialogo Nacional"?

La palabra "Dialogo Nacional" se ha puesto de moda en Nicaragua. La primera invitación al dialogo fue hecha por el propio Daniel Ortega, el pasado 22 de abril del 2018, cuando acorralado por el levantamiento popular, dijo: "la Resolución 138 fechada el 22 de abril anula la anterior Resolución. O sea, queda la Mesa limpia para sentarse a tratar el Tema (…) invito a Su Eminencia el Cardenal Leopoldo Brenes para que pueda participar con una Delegación de Obispos, (…) como Garantes, como Testigos, para estimular, darle seguimiento y darle fortaleza a lo que es un Diálogo que lleve al restablecimiento de la Paz, la Seguridad y la Estabilidad en nuestro País". (La voz del sandinismo, 22/04/2018)

En un comunicado, con fecha 24 de abril del 2018, la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) aceptó "estar en carácter de "mediador y testigo" del diálogo convocado por el Sr. Presidente de la República de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra (…) para facilitar el clima de diálogo consideramos esencial e imperativo que tanto el gobierno como cada miembro de la sociedad civil: evite todo acto de violencia, de irrespeto a la propiedad pública y privada y prevalezca un clima sereno y de absoluto respeto a la vida humana de todos y cada uno de los nicaragüenses".

Casi al mismo tiempo, alzaron sus voces los empresarios del Consejo

Superior de la Empresa Privada (COSEP), apoyando la propuesta de dialogo hecha por Ortega. José Adán Aguerri declaró: "reconocemos y valoramos que la lucha cívica y pacífica encabezada por nuestros jóvenes ha sido determinante para que el Gobierno haya derogado el decreto ejecutivo que generó esta crisis social (…) Valoramos como relevante que este diálogo incluyente sea garantizado por la Conferencia Episcopal y apelamos a su inicio urgente (…)". (END, 23/04/ 2018)

Mientras los empresarios del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) vivían una tórrida luna de mil con el gobierno sandinista, no sentían la necesidad de establecer un "Dialogo Nacional", ya que todos los asuntos que les perjudicaban sus altas de ganancias, mediante la aprobación de leyes y decisiones administrativas, los negociaban directamente con Daniel Ortega. Pero el portazo que dio el gobierno, aprobando de manera unilateral las reformas a la seguridad social, reflejaron un abrupto cambio en el modelo de "diálogos y consensos", que obligó a los empresarios a dar un brinco a la acera de enfrente.

A la posición del COSEP, se sumaron las declaraciones de Maria Nelly Rivas, presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AMCHAM), quien fue un poco más allá en sus demandas: "estamos atentos y listos al llamado de los obispos nicaragüenses para iniciar el diálogo nacional que debe tener una agenda amplia, entre ellos, el derecho a la movilización pacífica, garantías para los estudiantes y todos los nicaragüenses que participaron en las protestas, respeto a la libertad de prensa y de expresión, elecciones libres, entre otros" (Metro, 27/04/2018)

Juan Sebastián Chamorro, presidente de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), reconoció que "el objeto de discusión ya no es solamente el decreto sobre las medidas recaudatorias para cerrar el déficit del INSS, sino que consiste en evitar que la situación se deteriore más y se logre detener esta espiral de violencia". (END 23/04/2018)

Mientras se producían los naturales forcejeos (las multitudinarias marchas del COSEP el lunes 23 de abril, la de la Iglesia Católica el sábado 28 de abril y la los organismos de la sociedad civil el miércoles 9 de mayo), el gobierno respondió con dos contramarchas mucho más reducidas (30 de abril y 9 de mayo), que reflejaban la erosión de su base social.

En un hecho sin precedentes, los principales grupos económicos no luchan por derrocar al gobierno sandinista, sino que cerraron filas en la demanda conjunta de reformar el actual régimen político

bonapartista. La Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (ASOBANP), los exportadores de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AMCHAM), el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), exigieron lo siguiente: "I.- Abrir una investigación independiente y creíble, con la participación de organismos de derechos humanos de reconocida trayectoria, que investigue y ponga ante la justicia a los responsables de los crímenes ocurridos durante las protestas de abril del 2018. (…) II. Reformas al sistema electoral que incluyan la implementación a lo inmediato de las recomendaciones de los informes de la OEA en materia electoral y de partidos políticos, la elección de nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral y la observación electoral independiente, nacional e internacional, para garantizar elecciones libres y transparentes, respetando la voluntad de los nicaragüenses. III. Reformas institucionales que garanticen el estado de derecho, la independencia de los poderes del Estado y la eliminación de la corrupción. IV. Resolver la problemática de sostenibilidad y transparencia del INSS, incluyendo cambios de autoridades, propuestas al diálogo nacional de reformas que den viabilidad financiera a la seguridad social e inicio a lo inmediato una auditoría forense e integral de la institución".

El programa de los empresarios es bien claro: 1.- reformas al sistema electoral 2.- reformas institucionales y eliminación de la corrupción que perjudica sus negocios, 3.- un plan específico para el INSS.

La posición de Estados Unidos y la Unión Europea sobre el Dialogo Nacional

En su sucia campaña de desinformación, los medios de propaganda del sandinismo continúan refiriéndose a un "golpe blando" y al hecho que el gobierno de Estados Unidos está detrás financiando y promoviendo las movilizaciones populares. Pero estas afirmaciones no reflejan la realidad. Veamos por qué.

Heather Nauert, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, en un comunicado condenó "la violencia y el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y otras personas contra los civiles que ejercen su derecho constitucional a la libertad de expresión y reunión". (La Prensa 22/04/2018) Días después, la embajada norteamericana en Managua, dejo de atender al público.

Ese mismo día, el portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior

(SEAE) en un comunicado reflejo la posición de la Unión Europea: "La violencia es inaceptable, las diferencias solo se pueden resolver a través del diálogo inclusivo. Las protestas deben llevarse a cabo pacíficamente, y las fuerzas de seguridad pública deben actuar con la máxima moderación. La UE está dispuesta a apoyar un diálogo amplio e inclusivo entre todos los actores sociales y el Gobierno, y a fortalecer el Estado de derecho en Nicaragua" (EFE, 22/04/2018.

Al día siguiente, Chrystia Freeland, ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, emitió un comunicado afirmando que "Canadá está profundamente preocupada por las informaciones de varios muertos y heridos en las manifestaciones que se están produciendo en Nicaragua. Demandamos a todas las partes involucradas que resuelvan la situación con un diálogo pacífico e incluyente para proteger los derechos y seguridad del pueblo nicaragüense" (El Nuevo Diario, 24/04/2018)

La Casa Blanca de Estados Unidos emitió un comunicado que refleja la posición oficial de la administración de Donald Trump: "Estados Unidos condena la violencia y la represión propagadas por el Gobierno de Nicaragua y el cierre de medios de comunicación (…) La administración se une a la comunidad internacional en llamados a un diálogo amplio y apoyo para el pueblo de Nicaragua, que anhela la libertad de expresión política y las verdaderas reformas democráticas que tanto se merece" (AFP, 25/04/2018)

Como se puede observar, la posición de la administración de Donald Trump, en relación a la crisis en Nicaragua, es presionar para una reforma democrática, y bajo ninguna circunstancia se ha propuesto el derrocamiento de Daniel Ortega. Esta postura fue confirmada con el reciente discurso del vicepresidente Mike Pence, ante la Organización de Estados Americanos (OEA), el pasado 7 de mayo del 2018. El eje de ataque del gobierno de Estados Unidos fue la denuncia del próximo proceso electoral en Venezuela, y la necesidad de que la OEA sancione al régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Pence se refirió tangencialmente a Nicaragua, en dos párrafos, en los siguientes términos:

"En Nicaragua, cientos de miles de personas tomaron las calles para mostrar su enojo contra su envejecido líder socialista y su exigencia de regresar al orden democrático. Pero el represivo gobierno de Ortega ha respondido con fuerza letal, matando a docenas de manifestantes pacíficos y cerrando medios de comunicación independientes que se atrevieron a informar sobre sus acciones mortales.

Los Estados Unidos condena estas acciones brutales en los términos más enérgicos posibles. Pedimos al gobierno de Ortega que permita

la entrada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Nicaragua. Y nos unimos a las naciones de todo el mundo para exigir que el gobierno de Ortega responda a las demandas del pueblo nicaragüense de una reforma democrática y haga rendir cuentas a los responsables de la violencia. El pueblo de Nicaragua merece algo mejor que el empeoramiento de la represión del gobierno de Daniel Ortega".

El programa que el imperialismo norteamericano, canadiense y europeo, levantan sobre la crisis en Nicaragua, es coincidente: el cese de la represión, la aplicación de reformas democráticas, la realización del Dialogo Nacional y últimamente han solicitado que el gobierno de Daniel Ortega admita la presencia en Nicaragua de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), adscrita a la OEA

Diferentes visiones e intereses en torno al Diálogo Nacional

A lo anterior habría que agregar una situación sumamente contradictoria que se vive en Nicaragua. Por un lado, existe una dinámica insurreccional de las masas que demandan cada vez más claramente la salida del gobierno Ortega-Murillo, y por el otro lado, existen enormes ilusiones, a pesar de los enfrentamientos violentos y las muertes diarias, en una posible salida pacífica de la actual crisis, evitando la guerra civil, a través de la mediación de la Iglesia Católica y la instalación del Dialogo Nacional.

La mayoría de las masas ven una posible instalación del Dialogo Nacional como la necesaria mesa de negociaciones en donde se decidirán los cambios en el sistema político que pondrán fin al actual gobierno, por eso la consigna sobre la renuncia del gobierno Ortega-Murillo tiene aceptación cada vez más fuerte. Persisten fuertes ilusiones en que el dialogo y la negociación terminaran con la actual crisis.

Los estudiantes en lucha, por su parte, se dividieron en torno al tema del dialogo con el gobierno. Un sector radicalizado planteó que no había nada que negociar con el gobierno asesino, que "los muertos no podían negociar", pero otro sector, ligado a los organismos de la Coordinadora Civil, sostuvo que era necesario dialogar con el gobierno para negociar puntos torales como la autonomía en las universidades o la propia renuncia de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.

Al final, se impuso este línea negociadora y en una conferencia de prensa en un hotel en Managua, el Movimiento 19 de Abril, de reciente

creación, brindó una conferencia de prensa, en conjunto con José Adán Aguerri, presidente del COSEP, y Juan Sebastián Chamorro, presidente del FUNIDES, en que reafirmaron una alianza: "(…) demandamos el cese inmediato de las agresiones por parte de la Policía Nacional y de las fuerzas de choque; así como el cese de los mensajes y acciones de odio, desinformación y amenazas en contra de nuestros compañeros y familias. Estamos listos. Tenemos nuestros representantes y nuestros puntos de agenda, esperamos que la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) indique la fecha y la hora para la apertura del diálogo nacional. Reiteramos la demanda de invitar al país a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH-OEA) y a los Relatores para Temas de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) para que efectúen la investigación sobre la responsabilidad de los crímenes en contra de los estudiantes y la población, que es el primer punto de agenda por parte de todos los que suscribimos este mensaje". (El Nuevo Diario, 12/05/2018)

La creación de nuevas organizaciones estudiantiles es un fenómeno enormemente progresivo, después de un largo periodo de control totalitario del FSLN en las universidades públicas y privadas. Es muy probable que parte de la nueva dirigencia estudiantil desconozca los intereses particulares que mueven al COSEP, AMCHAM o FUNIDES, que perciban a estas organizaciones empresariales como aliados en la lucha por la democratización de Nicaragua. Es muy probable que tengan que vivir o sufrir amargas experiencias para madurar políticamente. Por ello consideramos que es nuestro deber advertir a estas nuevas organizaciones estudiantiles que deben desconfiar de las organizaciones empresariales, y que deben mantener una actitud independiente en cualquier trinchera de lucha, incluida cualquier negociación con el gobierno.

¿Por qué se ha retrasado la instalación del Diálogo Nacional?

Si todos están de acuerdo (los imperialismos, los empresarios, la Iglesia Católica y el gobierno de Ortega, incluso un sector importante del movimiento de masas y algunas de las organizaciones estudiantiles), ¿porque entonces no se ha convocado al Dialogo Nacional?

El gobierno Ortega-Murillo propuso inicialmente un dialogo sobre el tema específico de las reformas al INSS, invitando a la Iglesia Católica como mediadora, garante y testigo, creyendo que se restablecería el modelo de "diálogos y consensos" con los empresarios. Pero los

empresarios aprovecharon el momento para ampliar la agenda, incluyendo otros temas económicos y políticos.

Vale la pena precisar algunos aspectos de este momento. Inicialmente, las propuestas de negociación con el gobierno surgieron como un mecanismo para detener la salvaje represión y aclarar las responsabilidades en la masacre del 19 y 20 de abril, pero el gobierno, por un lado, y los empresarios, por el otro, fueron ampliando los temas y los participantes.

Lo ideal hubiera sido una negociación directa entre los estudiantes y los luchadores populares con el gobierno, sobre los temas relacionados con la masacre estudiantil y la democratización de las universidades y del sistema político, pero esta necesaria negociación fue desvirtuada y transformada en un Dialogo Nacional, es decir, en una mesa de múltiples temas de negociación. Al diluirse las reivindicaciones propias del movimiento estudiantil, el gobierno comenzó a retomar parcialmente la iniciativa estratégica.

El gobierno no convocó inmediatamente al "dialogo nacional" por una combinación de factores. En primer lugar, su estrategia de negociación siempre ha sido golpear para negociar, y hacerlo en el filo de la navaja, al borde del abismo. Se debe comprender que la conducción sandinista, representada por Daniel Ortega, refleja las tradiciones y psicología de una dirección guerrillera que logró encabezar una insurrección de masas en 1979, que luchó contra el ejército contra en el periodo 1982-1990, que se vio forzada a abandonar el poder en 1990 pero que nunca renunció a la idea de reconquistar el gobierno, y una vez que lo hizo en 2007 no está dispuesta a ceder fácilmente el poder, la fuente de su enriquecimiento y privilegios personales. El sandinismo no negociará antes de tiempo, es decir, primero demostrará con hechos que Nicaragua será ingobernable sin su presencia o colaboración.

En segundo lugar, dentro de su estrategia de negociar al borde el abismo, procedió a negociar secretamente por separado las demandas más importantes con los principales económicos, procurando reconstruir el consenso roto por la reforma al INSS, la masacre estudiantil de los días 19 y 20 de abril y la semi insurrección popular de los días siguientes. La estrategia de instauración y consolidación del régimen bonapartista de Daniel Ortega en los últimos 11 años, ha partido de la premisa de hacer concesiones económicas a los empresarios con tal que estos renuncien al protagonismo político. Para el gobierno Ortega-Murillo es un asunto clave volver a ese punto de partida

En tercer lugar, ha intentado en reiteradas ocasiones retomar la

iniciativa política, intentando movilizar a sus seguidores, fracasando en el intento, lo que ha evidenciado una ruptura importante de la base con la conducción sandinista que se niega a participar y más bien algunos sectores se han unido a la lucha estudiantil y popular.

En cuarto lugar, el gobierno de Ortega-Murillo intenta demostrar que las movilizaciones y protestas han descendido y que se trata de pequeños "grupúsculos de la derecha". En este punto, en vista que las protestas no han disminuido, ha tenido que aumentar los niveles de represión, procediendo a ejecutar asesinatos selectivos de jóvenes que participan en la lucha callejera. Camionetas del gobierno sin placas, pasan rafagueando las barricadas. Fuerzas de choque compuesta por paramilitares disparan sus fusiles AK-47 contra manifestantes desarmados. El número de víctimas continúa creciendo a diario.

Combinando estos cuatro factores, el gobierno pretende crear condiciones favorables para la instalación de un Dialogo Nacional, que le permita capear la tormenta, aplicando reformas cosméticas que no toquen el corazón del actual régimen político bonapartista.

Una espontánea insurrección desarmada

Existe una enorme contradicción entre la conciencia de las masas, que no desean una guerra civil y que confían en una salida negociada, con la realidad que a diario las empuja a la lucha generalizada. La semi insurrección de estudiantes y sectores populares en abril, que fue reprimida salvajemente, se está convirtiendo rápidamente en una insurrección, pero con masas desarmadas que soportan heroicamente las embestidas de la Policía Nacional y las fuerzas de choque del gobierno.

El catalizador ha sido la represión gubernamental. El retiro de las fuerzas policiales en algunos sectores solo ha servido para concentrar tropas y capacidad de fuego contra puntos álgidos en Masaya, León, Chinandega y otras ciudades.

Apenas se liberó un poco el control del régimen bonapartista, comienzan a aflorar reivindicaciones propias de sectores, como los taxistas y caponeros que se han sumado a la lucha, exigiendo una rebaja en el precio de los combustibles, que es un monopolio manejado por la familia Ortega-Murillo.

Las sistemáticas provocaciones no tienen límites. El gobierno ha

alentado los saqueos, para intimidar a los empresarios. Ha llegado al extremo de organizar grupos de choque para incendiar edificios gubernamentales, con el objetivo se sembrar el caos, atemorizar a la clase media que apoya la lucha estudiantil, y demostrar que solo el gobierno sandinista puede mantener el orden y la paz social. Los comerciantes del Mercado Oriental, el más grande de Nicaragua, organizaron sus propias milicias armadas de machetes, palos y piedras, para defender sus negocios contra posibles saqueos organizados por las "turbas" ligadas al gobierno.

Al mismo tiempo, los campesinos organizados en el Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía, que luchan conta el canal interoceánico, han comenzado a montar "tranques" (barricadas) en las carreteras de la zona central, obstaculizando en tránsito de vehículos y pasajeros.

¿Paro Nacional o paro escalonado?

Estos sectores populares (transportistas, comerciantes y campesinos) comienzan a confluir en los hechos, con la lucha estudiantil que, a pesar de la suspensión de clases a nivel nacional, todavía se mantiene con la toma de importantes recintos universitario como la UNAN-Managua y la UPOLI.

En algunos sectores de clase media ha tomado fuerza la necesidad de convocar a un Paro Nacional, pero mantienen la falsa ilusión que los empresarios deben convocarlo, cuando estos han sido claros en afirmar que sería la última opción, esperando los resultados del Dialogo Nacional. Otros sectores, impulsan la propuesta de un Paro Nacional pero escalonado, con el riesgo del desgaste y cansancio de cada uno de los sectores en lucha. La desventaja del paro escalonado es que, lejos de debilitar al gobierno, debilita a las masas porque la lucha de produce de manera parcial e intermitente, permitiéndole al gobierno concentrar tropas y fuerzas de choque en los sectores donde la lucha ha alcanzado puntos álgidos.

En cambio, el Paro Nacional permitiría que las masas que hoy pelean sin coordinación en cada departamento, golpeen juntas al mismo tiempo, haciendo sentir su fuerza indestructible. El Paro Nacional desarticularía el aparato represivo del gobierno, permitiendo el avance de la lucha y la autoorganización de las masas.

Es urgente crear una Coordinadora Nacional de Luchadores que

incluya a estudiantes y demás sectores populares. No podemos seguir enfrentando la represión de manera separada, debemos unificar la defensa a nivel local y nacional.

No se debe tener ilusiones que los empresarios deben convocar al Paro Nacional, deben ser los trabajadores, que todavía se encuentran subyugados y atomizados, quienes deben organizarse en comités y sindicatos independientes para impulsar el Paro Nacional, apoyándose en los demás sectores populares. Las obreras de las maquilas están llamadas a jugar un papel clave en esta recomposición de la clase trabajadora.

¿Qué hacer con el Dialogo Nacional?

Bajo estas condiciones, en un ambiente insurreccional, está programada la instalación formal del Dialogo Nacional el día lunes 14 de mayo, en el seminario de la Iglesia Católica. No negamos que en cualquier lucha se puede y se debe entablar algún tipo de negociación con el enemigo, pero bajo la condición que estas negociaciones sean públicas, que no pongan en peligro el objetivo de la lucha y que cualquier decisión sea consultada y aprobada por el pueblo que lucha en las calles.

De antemano, alertamos que el Dialogo Nacional, a como está concebido (una mesa de negociación con los empresarios, y no una mesa de negociación con los estudiantes y sectores en lucha) no resolverá ni uno solo de las exigencias planteadas, como el cese de la represión, la investigación y castigo a los culpables de la masacre, o la democratización de Nicaragua.

Debido a que el Movimiento 19 de Abril ha decido participar, en conjunto con los empresarios del COSEP, en el Dialogo Nacional, los exhortamos a que revisen este decisión y la consulten con los estudiantes que mantienen tomados los recintos y con aquellas universidades que han salido a manifestarse. Desde ya, llamamos a la delegación estudiantil a romper esa mesa de negociación, y a preparar las condiciones de un Paro Nacional masivo.

La consigna de la renuncia de Ortega-Murillo

Cada vez más sectores sociales demandan la renuncia de Ortega-Murillo, aunque esta no ha sido la consigna principal de las marchas

opositoras, por todos lados se escuchen los gritos exigiendo el fin del gobierno asesino. Las masas quieren un cambio de gobierno, aunque mantienen las ilusiones que puede lograrse por la vía del diálogo y la negociación. Aquí es donde tenemos concentrada la contradicción de la situación actual: las masas quieren el fin del gobierno Ortega-Murillo pero todavía no concluyen que deben tumbarlo ellas mismas mediante la acción centralizada de un Paro Nacional.

La consigna de la renuncia del gobierno Ortega-Murillo pretende ejercer presión sobre Daniel Ortega y Rosario Murillo para que renuncien voluntariamente a seguir ejerciendo el poder. Esta consigna tiene el inconveniente que da una repuesta parcial y limitada a este sentimiento generalizado de cambio de gobierno. El objetivo es el cambio de gobierno, pero el método de presionar en el futuro Dialogo Nacional para que Ortega-Murillo renuncien, resulta parcial e insuficiente. Daniel Ortega no va a renunciar, antes prefiere incendiar el país. Cualquier intento por convencer a Ortega-Murillo que abandonen el poder está condenado de antemano al fracaso.

Por eso es que, si la consigna de exigir la renuncia de Ortega-Murillo no está acompañada de un método de lucha masivo, como la huelga general o el paro nacional, el objetivo no podrá ser logrado.

¡Abajo el gobierno Asesino!

Los continuos asesinatos selectivos de jóvenes confirman que el gobierno Ortega-Murillo hará cualquier cosa, hasta llegar al genocidio, con tal de preservar el poder. Es urgente organizar las milicias de autodefensa en todos los barrios y recintos universitarios, para neutralizar los ataques del gobierno.

La represión constante invalida por el momento cualquier procedimiento democrático para solucionar la crisis, como podría ser un plebiscito o referéndum, o elecciones generales anticipadas. El gobierno se resiste a convocar a elecciones, y solo trata de ganar tiempo y maniobrar dentro del Dialogo Nacional para recomponer sus alianzas con los empresarios.

Lo único que queda es convocar a un Paro Nacional para sacar al gobierno asesino Ortega-Murillo, pero una posible caída del gobierno nos plantea la urgente necesidad de levantar una alternativa de gobierno que le sustituya. Algunos sectores plantean la instauración de un gobierno provisional compuestos por personalidades "honorables",

pero estas personalidades obedecen a los grupos económicos, y esta no es la salida que resolverá los problemas de las masas trabajadoras.

Debemos tumbar al gobierno asesino a través del Paro Nacional. Las bases de un gobierno provisional están dadas en la coordinación incipiente que ya se realiza entre los estudiantes y los sectores populares en lucha como campesinos, transportistas y otros sectores sociales en lucha. Este gobierno provisional encabezado por los estudiantes en lucha, debe disolver todos los poderes, aprobar las necesarias reformas democráticas al sistema electoral, y convocar inmediatamente a elecciones a Asamblea Nacional Constituyente en un plazo máximo de 90 días para que el pueblo decida democráticamente su propio destino y como reorganizar el Estado en beneficio de las grandes mayorías.

Esta Asamblea Nacional Constituyente debe elegir un gobierno temporal mientras se aprueba la nueva Constitución. Al mismo tiempo, deberá nombrar una Comisión de Investigación Independiente, que averigüe sobre quienes dirigieron y organizaron la masacre estudiantil y los asesinatos selectivos que todavía se producen.

Centroamérica, 13 de mayo del 2018

Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)
Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)

V.-

ORTEGA-MURILLO NO QUIEREN RENUNCIAR: ¡PARO NACIONAL PARA CAMBIAR EL GOBIERNO Y CONVOCATORIA INMEDIATA A ELECCIONES DE ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE!

La lucha contra el gobierno Ortega-Murillo parece haber entrado en un laberinto sin salida. El régimen ha sido herido con la insurrección desarmada de los últimos días, pero Daniel Ortega y Rosario Murillo se resisten a renunciar, más bien se aferran al poder, creando mayores dificultades al movimiento popular, las que debemos vencer para triunfar. Por ello necesitamos hacer un recuento de lo ocurrido, para encontrar soluciones a los desafíos planteados.

El Diálogo Nacional: ilusiones y decepciones

El pasado 16 de mayo fue instalado solemnemente el Diálogo Nacional, con la presencia de Daniel Ortega y Rosario Murillo, los obispos de la Conferencia Episcopal y el cuerpo diplomático. Esta sesión del Diálogo Nacional fue transmitida en cadena nacional de radio y televisión. En los días anteriores, la propaganda del gobierno y de los grupos estudiantiles, con intereses y visiones distintas, habían convertido al Diálogo Nacional en la panacea de todos los problemas que originaron el levantamiento popular.

En momentos álgidos de la lucha, los delegados del Movimiento

Estudiantil 19 de Abril, formado a raíz de la masacre estudiantil, compuesta por grupos de diferentes universidades, consideraban que su presencia en el Diálogo Nacional era un requisito necesario para obtener la renuncia de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. Y esa era la visión entusiasta de muchos, quienes consideraban que las gigantescas manifestaciones habían demostrado que la mayoría del pueblo exigía la finalización del gobierno Ortega-Murillo.

Los empresarios del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), antiguos aliados del régimen, pero temporalmente enemistados con la pareja presidencial, también compartían este punto de vista cortoplacista. La intensidad del conflicto inter burgués, obligó al COSEP a cambiar los roles de sus dirigentes principales. En momentos de confrontación con el gobierno, el anterior protagonismo de José Adán Aguerri, ha sido sustituido por el discurso más agresivo de Michael Healy, el presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (UPANIC), que lidera al sector terrateniente.

Unos días antes de la instalación del Diálogo Nacional, el 11 de mayo, mediante la firma de un comunicado conjunto, se produjo una inusual alianza entre el COSEP, la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), los ONGs de la llamada sociedad civil y el Movimiento Estudiantil 19 de Abril. Esta unidad en los hechos dejó de ser una táctica, y se transformó en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), en la que participa también el movimiento campesino anti canal interoceánico, organizado en el Consejo Nacional en Defensa de Nuestra Tierra, Lago y Soberanía

Todos estos grupos, con visiones e intereses diferentes, coincidieron en un solo punto: que el Diálogo Nacional era la solución para los problemas de Nicaragua. Las ilusiones en el Diálogo Nacional también eran compartidas por una parte de la población, que mantenía la expectativa de obtener la renuncia voluntaria de Daniel Ortega y Rosario Murillo, evitando de esta manera el estallido de una nueva guerra civil.

Ortega pretende cansar a las masas en lucha

Con la instalación formal del Diálogo Nacional se inició una gigantesca maniobra del gobierno Ortega-Murillo con el objetivo de cansar y debilitar al movimiento de masas, recomponer su imagen en el exterior, sobre todo para mantener la neutralidad amistosa de la administración de Donald Trump.

Ortega invitó a la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), como demandaba la ACJD, la que arribó a Nicaragua el mismo día de la instalación del Diálogo Nacional. El discurso de Ortega no fue conciliador, sino amenazante. La instalación del Diálogo Nacional terminó en nada, debido a que ni siquiera se plantearon las exigencias de la ACJD.

La primera sesión se realizó el viernes 18 de mayo, y produjo los primeros acuerdos. En comunicado oficial, la Comisión Mediadora, formada por los obispos, expresó que todas las partes llamaron urgentemente a "detener los actos de violencia (…) Todos los sectores se comprometieron a realizar una tregua, el sábado 19 y domingo 20 de mayo, en la que el gobierno se obliga a retirar a sus cuarteles a la policía y retirar fuerzas de choque, simpatizantes del gobierno, y la sociedad civil deberá aunar esfuerzos para propiciar mejores condiciones al Diálogo, normalizar el tránsito y continuar en un mejor clima el lunes 21 de mayo 2018".

Esta "tregua" hizo crecer las expectativas de que el Diálogo Nacional podría traer soluciones, pero reflejó al mismo tiempo las debilidades de la actual dirigencia, tanto del movimiento estudiantil como de los ONGs. Estas posturas "flexibles" le permiten al gobierno retomar la ofensiva, como efectivamente ocurrió.

La segunda sesión del Diálogo Nacional se realizó el lunes 21 de mayo, donde se produjo un nuevo acuerdo: ambas partes retomarían las 15 conclusiones del informe demoledor de la visita de la CIDH: 76 personas fueron asesinadas en el contexto de las protestas, 868 fueron heridas, 438 personas fueron detenidas. El informe de la CIDH incluyó el cese de la represión, respeto al derecho de protesta, creación de un mecanismo internacional de investigación de la masacre, investigación y sanción a los culpables, " asegurar que los operativos de seguridad respecto a protestas y manifestaciones se ejecuten según los protocolos de actuación acordes con los estándares internacionales relativos al uso de la fuerza por agentes encargados de hacer cumplir la ley", desmantelamiento de los grupos paramilitares, libertad de prensa, correcta atención de los heridos en los hospitales, y seguimiento internacional de los hechos.

El gobierno de Ortega ya no puede negar el alcance de la masacre y la represión, pero nuevamente maniobraba para desvirtuar el informe de la CIDH. EL FSLN dio la orden a su militancia que presentara denuncias masivas de supuestas agresiones, para colocarse en un plano de igualdad como víctimas. Ya no niega los acontecimientos, pero afirma que también hay policías y sandinistas muertos.

En esta sesión, afloraron las tensiones y las recriminaciones mutuas, debido a que el gobierno comenzó a insistir en la necesidad de suspender los "tranques" (bloqueos) en las carreteras, caminos y barrios, para garantizar el derecho al trabajo y la libre circulación.

Los tranques y el decaimiento de las marchas

Para el lunes 21 de mayo, los tranques se habían convertido en el eje de la lucha, debido a la disminución de las marchas en las ciudades. Las marchas no han desaparecido, pero se mantienen intermitentes, sin conexión una con otra, y con la tendencia a disminuir la cantidad de personas en las mismas. Este fenómeno es una consecuencia lógica de la prolongación de la lucha. Contrario al ambiente eufórico que siguió a las gigantescas marchas en Managua y otras cabeceras departamentales, Daniel Ortega no estaba con un pie en el avión, sino que se mostraba desafiante, maniobrando, para ganar tiempo y con una voluntad firme de aferrarse al poder a cualquier costo.

En las movilizaciones de finales de abril y comienzos de mayo, eran visible dos grandes segmentos sociales que marcharon unidos: sectores radicalizados de los diferentes estratos de la clase media, principalmente en Managua, y la enorme masa popular de las barriadas y los pueblos del interior. Una verdadera "insurrección desarmada" que después de varios días de lucha, comenzó a declinar por tres factores: en primer lugar, el gobierno Ortega-Murillo redujo los niveles de represión, sacando a la policía de las calles, y solamente dejando a los grupos paramilitares que golpearan selectivamente los puntos más álgidos; en segundo lugar, un gran problema subjetivo, y es que la actual conducción de este movimiento de masas ha cometido el error de priorizar las negociaciones en el Diálogo Nacional por encima de la profundización de la movilización popular, negándose a convocar a un Paro Nacional, manteniendo la lucha fragmentada, inconexa; en tercer lugar, la consigna de la renuncia de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, si no va acompañada de la necesidad de impulsar el Paro Nacional, termina convirtiéndose en un sueño irrealizable.

El gobierno Ortega-Murillo utiliza grupos para militares para mantener el asedio y zozobra sobre los tranques y recintos universitarios tomados, llegando a utilizar francotiradores o pistoleros que asesinan selectivamente a los luchadores mas combativos. Por ello, debemos organizar Brigadas de Autodefensa, para garantizar la integridad física de los compañeros que están el frente de la lucha.

Las marchas por sí solas, por muy poderosas que sean, desconectadas unas de otras, no provocarán la renuncia del gobierno Ortega-Murillo si no existe el convencimiento del movimiento de masas de que es necesario derrocar al gobierno asesino. Este convencimiento no ha llegado todavía, porque han existido ilusiones en las negociaciones.

Algunos de los sectores luchan honestamente contra el gobierno, conciben la movilización solamente como mecanismo de presión auxiliar dentro del Diálogo Nacional, y no como el eje de la actividad. No se comprende la relación dialéctica entre movilización y negociación. La intensidad y generalización de la movilización es determinante, es lo más importante. Mientras la movilización no sea contundente, manifestada en un poderoso paro a nivel nacional, el gobierno Ortega-Murillo maniobrará, ganará tiempo, esperando el agotamiento, mientras recompone sus fuerzas partidarias.

Por ello, el eje de ataque del gobierno se ha concentrado en desmantelar los "tranques", que se han convertido en la principal trinchera de lucha, por el decaimiento de las movilizaciones populares. Ha exigido como punto dentro del Diálogo Nacional el levantamiento de los tranques, lo que equivale a la rendición de la lucha

Las tomas de los recintos y la dispersión de la vanguardia estudiantil

Otro factor que ha influido en el decaimiento de las marchas de protesta, es la dispersión de las masas estudiantiles, que ha sido la vanguardia de la lucha democrática.

Al suspenderse las clases de manera indefinida en las universidades públicas y privadas, se ha dispersado el sector social que inició la lucha contra el gobierno Ortega-Murillo. Las tomas de los recintos universitarios reflejaron la dinámica de lucha, y el repudio a la burocracia estudiantil de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN). Las tomas de los recintos en la UPOLI, UNI, UNA y UNAN concentran actualmente a los elementos más combativos de la vanguardia estudiantil, pero al prolongarse la lucha tenemos un resultado contradictorio: lo mas combativo y decidido de los estudiantes está aislada en los recintos, desligado de la base estudiantil. Esto, evidentemente, no es obra de los estudiantes, sino de la realidad y de la maniobra del gobierno al suspender clases de manera indefinida.

Entonces tenemos que el motor de las movilizaciones, los estudiantes

universitarios, una parte está cercado en los recintos, resistiendo las presiones de los grupos paramilitares que los asedian a diario, mientras que el grueso de la masa estudiantil esta desmovilizada en sus casas, participando como individuos en las marchas de protesta.

Es urgente que las organizaciones estudiantiles discutan cómo superar esta contradicción, para volver a reunir a la vanguardia estudiantil y que ésta nuevamente revitalice las marchas de protesta contra el gobierno.

Los trabajadores siguen ausentes

A lo anterior habría que agregar que los trabajadores organizados, tanto del sector público como del privado, siguen siendo los grandes ausentes en las movilizaciones. Incluso, el gobierno Ortega-Murillo ha pretendido convertirse en abanderado del derecho al trabajo de los obreros de zonas francas, al reclamar en el Diálogo Nacional que estos no están llegando a sus centros de trabajo por el bloqueo de carreteras.

El control que el FSLN impuso a los sindicatos y centrales obreras, mantiene a los trabajadores maniatados. Esta situación ha llevado a muchos a pensar que el Paro Nacional será posible solo si los empresarios lo convocan. Los trabajadores deben romper sus cadenas y romper con las dirigencias sindicales aliadas del gobierno, creando nuevos sindicatos o comités sindicales. ¡El Paro Nacional contra el gobierno será obra de los trabajadores, o nunca será!

La agenda de democratización de la ACJD

Para la tercera sesión del Diálogo Nacional, convocada el miércoles 23 de mayo, la ACJD presentó la agenda para la democratización de Nicaragua, la cual fue presentada por la Comisión Mediadora presidida por los obispos.

El primer punto de esta agenda, demanda la realización de una "Reforma parcial de la Constitución Política a fin de adelantar las elecciones presidenciales, municipales, legislativas y de las regiones autónomas, a la mayor brevedad posible. Un título transitorio que incorpore: 1.- Reducción de períodos de autoridades nacionales, municipales, regionales y del Parlamento Centroamericano. 2.- Adelanto y convocatoria a elecciones generales de autoridades sujetas a elección popular. 3.- Reducción del período de las autoridades de los poderes del

Estado: Consejo Supremo Electoral, Corte Suprema de Justicia y de la Contraloría General de la República".

Como parte de la democratización, proponen "volver al porcentaje para resultar electo como presidente vigente en 1995", es decir, restablecer el 50% más uno de los votos para la primera vuelta electoral, y la mayoría dentro de la segunda vuelta electoral. Para realizar la reforma constitucional, proponen reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo, de manera que la presente legislatura de la Asamblea Nacional termine el 30 de junio del 2018, y la nueva legislatura comienza en agosto y termine en diciembre del 2018.

Para aplicar este plan, proponen aprobar una Ley Marco para la implementación de los acuerdos políticos del Diálogo Nacional, los que deben ser impulsados por la Asamblea Nacional controlada totalmente por el FSLN.

También plantean que el adelanto de las elecciones, debe ser vigilado por la OEA, ONU, Centro Carter y Unión Europea. La restructuración del Consejo Supremo Electoral (CSE) debe ser nombrados por consenso dentro del Diálogo Nacional, de la misma manera debe aprobarse la reforma a la Ley Electoral (que incluya las candidaturas independientes de suscripción popular) y aprobar una nueva Ley de Partidos Políticos. Así como realizar otras reformas estructurales que propicien la elección de una nueva Corte Suprema de Justicia, y la independencia de los poderes del Estado.

Como se puede observar, esta agenda se concentra en una reforma constitucional para el adelanto de las elecciones, y el nombramiento por consenso de nuevas autoridades en las instituciones del Estado.

El gobierno Ortega-Murillo tildó la agenda de la ACJD como un "golpe de Estado", porque con el adelanto de las elecciones se pretende terminar con el periodo presidencial de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y con el control absoluto del FSLN sobre las demás instituciones del Estado.

Esta pretendida agenda para democratización de Nicaragua se limita a amenazar con la convocatoria de elecciones anticipadas, pero al mismo tiempo busca como negociar, y por medio de una Ley Marco, la transición y el nombramiento de nuevas autoridades en todos los poderes del Estado. En pocas palabras, pretende un nuevo reparto de las instituciones del Estado, pero dejándole una cuota importante de poder al FSLN.

El canciller Denis Moncada Colindres, declaró asustado: "La agenda que se presentó hoy tiene visos de desmontar el Estado constitucional legítimamente electo, ese es el objetivo de esa agenda. Es una ruta para un golpe de Estado, para derrocar al Gobierno" (Confidencial, 23/05/208)

Los obispos presentaron la Agenda de la ACJD como parte del orden del día, lo que provocó el malestar del gobierno. Al no haber acuerdos, los obispos se vieron obligados a emitir un comunicado que en un su parte final, expresaba lo siguiente: "(…) Dado que hoy no se ha logrado ningún consenso entre las partes, los Obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, como mediadores y testigos del Diálogo Nacional lamentamos vernos obligados, debido a esta falta de consenso, a suspender por ahora esta mesa plenaria del Diálogo Nacional. No obstante sugerimos la conformación de una comisión mixta de seis personas, tres por cada parte, con el objetivo de que logren un consenso para superar este (…)". (Comunicado del 23/05/2018).

De esta manera, la realidad se encargó de poner fin a las ilusiones democráticas de que en el Diálogo Nacional se negociaría la salida de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.

El gobierno acusó a los obispos de haberse parcializado a favor de la ACJD, insinuando que se debía cambiar al mediador.

El gobierno Ortega-Murillo desempolva los acuerdos secretos con la OEA, pero ….

Un día antes que el Diálogo Nacional entrara en coma, el martes 22 de mayo, arribó a Managua una delegación de la Organización de Estados Americanos (OEA) encabezada por Gonzalo Koncke y Luis Ángel Rosadilla. Al día siguiente, en la tercera sesión del Diálogo Nacional, el gobierno solicitó que la delegación de la OEA participara en el Diálogo Nacional, pero los obispos respondieron que aceptarían solo si la delegación estaba encabezada por Luis Almagro.

Al final de la jornada, el Diálogo Nacional entró en crisis, pero resultó evidente que el gobierno sandinista no estaba dispuesto a hacer concesiones sustanciales en una mesa de negociación a nivel nacional, sino que necesitaba retomar los acuerdos secretos que fueron firmados en enero del 2017 con la secretaria general de la OEA, en la que el gobierno sandinista se comprometía a realizar elecciones vigiladas para

el año 2021. Ante la presión ejercida por la Agenda de Democratización presentada por la ACJD, Daniel Ortega recurre a los acuerdos secretos firmados con la OEA, ya que le permitirían superar el escollo de realizar elecciones anticipadas. Esta ha sido el punto toral: Daniel Ortega se resiste a renunciar, quiere terminar su periodo presidencial y convocar a elecciones hasta el 2021.

El mismo día que el Diálogo Nacional entró en crisis, Luis Almagro difundió un video en donde, desmentía a la oposición de derecha, pero también aclaraba cual era la nueva posición de la OEA: "(…) en cuanto a la salida política en Nicaragua hemos insistido en que la salida debe ser electoral, sin exclusiones, sin habilitaciones, con un proceso electoral justo, claro, transparente. De hecho, nos encontrábamos abocados a ello, en un proceso negociador, que tenía por objetivo alcanzar ese resultado (…) Cualquiera que piense que Nicaragua tiene una solución diferente a la electoral se equivoca gravemente. Cuando la sociedad esta polarizada, la decisión debe volver en forma urgente al soberano: el pueblo. (…)"

Con esta alocución, Luis Almagro dejo a un lado los acuerdos de enero del 2017, y avanzó unos pasos más para presionar al gobierno Ortega-Murillo para adelantar las elecciones.

Trump comienza a preocuparse por el poco avance de reformas democráticas

El 25 de mayo, dos días después de la crisis del Dialogo Nacional, el departamento de Estado de los Estados Unidos emitió una corta nota de prensa, en que expresaba: "El gobierno nicaragüense debe crear las condiciones propicias para un diálogo creíble e inclusivo y garantizar la seguridad de los participantes. Hacemos un llamado al Gobierno de Nicaragua para que implemente plenamente las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) independiente, y actuemos sobre sus conclusiones para garantizar la rendición de cuentas y la justicia ante los abusos y las violaciones de los derechos humanos. Estamos extremadamente preocupados por la falta de progreso en el diálogo nacional debido a la incapacidad del gobierno de participar creíblemente en la democratización. Instamos al gobierno de Nicaragua a que negocie de buena fe y regrese al diálogo con una agenda para lograr un futuro democrático para todos los nicaragüenses".

Hasta el momento, la administración Trump ha mantenido un perfil bajo, y en anteriores declaraciones, se inclinó por el dialogo y

la implementación de reformas democráticas. El problema es que la renuencia del gobierno Ortega-Murillo puede complicar lo que Daniel Ortega ya había negociado con la OEA. A Trump le preocupa que la ausencia de reformas provoque una frustración masiva, un nuevo estallido insurreccional, un desbordamiento y radicalización del movimiento de masas. El imperialismo norteamericano quiere conducir el descontento al cauce electoral. La gran discusión es el adelanto de las elecciones, lo que implicaría la terminación anticipada del gobierno Ortega-Murillo. El imperialismo no quiere una nueva revolución, sino cambios graduales que garanticen la transición democrática

La injerencia del imperialismo norteamericano, el intervencionismo de la OEA, y las vacilaciones de los empresarios del COSEP, son factores que los estudiantes y resto del pueblo debe analizar, y por ello debemos crear nuestra propia alternativa de poder independiente.

Superar el impasse: los estudiantes deben convocar al Paro Nacional

El decaimiento temporal de las marchas ha provocado un estancamiento en las negociaciones dentro del Dialogo Nacional, y que estas se trasladen a foros como la OEA donde no hay injerencia o capacidad de decisión de las masas en lucha. Por su parte, para romper el impasse, de cara una posible reanudación de las negociaciones, la ACJD ha convocado a una marcha nacional de protesta para el 30 de mayo, Dia de la Madre. Esta convocatoria cuenta con el apoyo del COSEP y de la Iglesia Católica. La reanudación de las movilizaciones masivas es importante para arrinconar al gobierno Ortega-Murillo, pero estas jornadas de lucha, para ser realmente efectivas, deben conducir a la realización de un Paro Nacional, donde los trabajadores y los sectores populares impongan su voluntad.

En estos días, ha quedado más claro la posición timorata de los empresarios del COSEP, quienes se niegan a participar en un Paro Nacional. Pero también ha crecido el clamor popular a favor del Paro Nacional. Debido a la situación calamitosa de los sindicatos, controlados por el gobierno, creemos que la convocatoria a un Paro Nacional debe ser lanzada, en las actuales circunstancias, desde las organizaciones estudiantiles, los únicos que tienen la autoridad moral y política para convocar al resto de los sectores populares a materializar el Paro Nacional.

De igual manera, llamamos a los estudiantes a organizar brigadas

de agitación que visiten los centros de trabajo, las zonas francas, y expliquen a los trabajadores la necesidad de impulsar un Paro Nacional, a partir de la declaratoria de huelga en las empresas del sector privado, incorporando también a los empleados públicos. La alianza de los trabajadores, estudiantes y sectores populares, nos dará la victoria.

Los tranques son importantes, pero jamás podrán sustituir la acción organizada de todo el pueblo. Quienes luchan desde los tranques han sido muy flexibles, permitiendo el paso escalonado de vehículos, por eso hay todavía abastecimiento en los mercados, hay combustible en las gasolineras, pero el gobierno se ha aprovechado de esta flexibilidad para matar la resistencia popular. Los costos económicos y sociales del cambio de gobierno, se pueden aminorar si el Paro Nacional se produce de manera intensa y conjunta en todo el territorio nacional.

No podemos desgastarnos en luchas aisladas, debemos unir fuerzas en un Paro Nacional, cuya convocatoria muchos están esperando. A pesar del rechazo creciente al gobierno Ortega-Murillo todavía no queda claro en muchos sectores quién podría sucederles. Por eso es muy importante discutir y clarificar el tipo de gobierno que necesitamos.

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llamamos a luchar por la creación de una Coordinadora Nacional de Luchadores, compuesta por delegados de todos los sectores que están en lucha, desde quienes tienen tomadas los recintos universitarios, hasta quienes están peleando en los tranques, y barricadas en los barrios populares.

Esta Coordinadora Nacional de Luchadores debe actuar de manera independiente de los empresarios del COSEP, obedeciendo solo al mandato de los sectores populares en lucha, levantando todas las reivindicaciones de los sectores populares: aumento de salarios para los trabajadores, estabilidad en el empleo para los trabajadores estatales, reducción del precio de los combustibles para los transportistas, derogación de la Ley No 840 como lo reclama el movimiento campesino, libre organización sindical, recuperación de la autonomía universitaria, respeto a las libertades democráticas y los derechos fundamentales, etc.

Estos comités o grupos de luchadores debemos buscar la coordinación y centralización, para convertirnos en una real alternativa de gobierno democrático y popular, cuya principal tarea sea la convocatoria inmediata de una Asamblea Nacional Constituyente, que reorganice Nicaragua en beneficio de los más pobres.

Centroamérica, 26 de Mayo del 2018.

Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)
Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)

VI.-

CONVERTIR EL PARO NACIONAL EN INSURRECCIÓN GENERAL: ¡ABAJO EL GOBIERNO ORTEGA-MURILLO!

Después de dos meses de dura lucha del pueblo en los tranques y en las calles, y ante la resistencia del gobierno Ortega-Murillo a realizar reformas democráticas, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) compuesta por organismos de la sociedad civil, el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AMCHAM), la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES) han decidido convocar a un Paro Nacional de 24 horas para el jueves 14 de junio del 2018, cediendo al clamor popular que demandaba acciones enérgicas y contundentes para detener la represión criminal del gobierno.

En realidad, para no quedar descolocados en relación a la dinámica insurreccional, las cámaras empresariales decidieron sumarse al Paro Nacional que ya se venía realizando en algunas ciudades como León, que realizó un exitoso Paro Cívico Local el día de hoy. La semiparalización de las actividades económicas venía creciendo, fundamentalmente por la actividad revolucionaria de los tranques y las barricadas en los barrios.

Esta parálisis económica afecta duramente a los pequeños y medianos negocios, formales e informales, un sector social muy amplio, que se encuentran asfixiados, al borde de la ruina. El gobierno Ortega-Murillo pretende que este amplio sector social abandone la lucha democrática.

La ACJD finalmente ha convocado al Paro Nacional, no para derrocar el gobierno Ortega-Murillo, sino para presionar a Daniel Ortega, para que regrese a la mesa de negociaciones del Dialogo Nacional, que fueron suspendidas el pasado 23 de mayo del 2018.

Brutal contra ofensiva militar contra los tranques

Después de una fallida reunión de mediación de los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) con Daniel Ortega, el día 7 de junio del 2018, este solicitó 48 horas para dar una repuesta a la propuesta de Agenda de Democratización planteada por la ACJD, pero al vencerse el plazo no hubo la repuesta esperada, lo que hizo fue desatar una contra ofensiva militar contra los principales tranques: Jinotega fue atacada a pesar de existir un acuerdo local de no realizar ataques violentos; la población de Maderas fue atacada a balazos en medio de la oscuridad y la lluvia, cuando los morteros no pueden ser encendidos; el tranque en Sébaco fue atacado a balazos, obligando a los pobladores a replegarse, diversos poblados en Nueva Segovia y Carazo fueron atacados. Uno a uno, los principales tranques en las carreteras fueron atacados, algunos fueron disueltos, otros lograron mantenerse a un alto costo de sangre.

Los tranques no solo han semiparalizado la economía de Nicaragua, sino que tienen paralizado el comercio regional, en la medida que los camiones de otros países de Centroamérica no pueden llegar a sus destinos. La crisis en Nicaragua afecta directamente al conjunto de Centroamérica.

Aprovechando que los ojos del mundo estaban centrados en la cumbre Trump-Kim Jong Um, que se realiza en Singapur, Daniel Ortega desató una brutal contra ofensiva sangrienta a nivel nacional, confiando en que los organismos protectores de los derechos humanos se harían de la vista gorda, como realmente ocurrió. El número de muertos ya superó la cifra de 140 y ha aumentado dramáticamente el número de heridos y detenidos.

Las oscuras y sangrientas fuerzas de choque del FSLN

Las tropas de la Policía Nacional ya resultan insuficientes para aplastar la dinámica insurreccional que se manifiesta en el fenómeno de proliferación espontánea de tranques en todo el territorio nacional. Por eso el gobierno de Ortega ha recurrido, como lo hacían las dictaduras militares en América Latina, a grupos de simpatizantes cubiertos de capuchas o pasamontañas, quienes se movilizan armados con fusiles AK-47 y Dragunov, en las camionetas Hilux doble cabina, de uso reconocido por los ministerios del Estado, para sembrar el terror en los barrios, atacando hogares, cateando los hogares de reconocidos

activista del movimiento popular, golpeando o asesinándolos, a veces secuestrándolos, destruyendo la vivienda y enseres domésticos.

El uso de este ejercito clandestino es apoyado por la Policía Nacional, quienes le cubren la retirada. El Ejercito guarda una "neutralidad" cómplice. La misión de estos escuadrones de la muerte es sembrar el terror, hacer la labor sucia de matar y destruir, pero sin usar a las tropas uniformadas de la Policía Nacional o del Ejercito. En las noches, principalmente en la ciudad de Managua, las calles permanecen vacías por temor a ser víctima de las fuerzas de choque que disparan a mansalva, con el objetivo de evitar que las noches sean utilizadas para levantar tranques.

Los tranques en Managua

La capital de Nicaragua ha sido la vanguardia en las movilizaciones nacionales que reclamaron la salida del gobierno Ortega-Murillo. La masacre del 30 de mayo tuvo el objetivo de evitar nuevas e impresionantes marchas. No obstante, el terror que siembran las fuerzas de choque por las noches ha obligado a muchos barrios de Managua a levantar barricadas, como medida de autodefensa para evitar que las fatídicas camionetas Hilux entren a matar y secuestrar activistas.

Fue así que el día lunes 11 de junio, los barrios orientales de Managua, de origen proletario, amanecieron con tranques, lo que obligó al gobierno Ortega-Murillo a desatar un violento contra ataque en su contra. La superioridad de fuego de la Policía y las fuerzas de choque destruyeron las barricadas. Los camiones de la Alcaldía de Managua, en manos del FSLN, se llevaron los adoquines para que no se levantaran nuevamente las barricadas, pero estas volvieron a ser levantadas en cantidades menores y en otros lugares.

En todos los mercados de Nicaragua los comerciantes han levantado barricadas para evitar los saqueos de las "turbas" del FSLN. Daniel Ortega resiste, a sangre y fuego, apoyado en la Policía Nacional, las fuerzas de choque y en la aparente neutralidad del Ejercito, porque sabe que entre más debilite a las masas, cansándolas y matando selectivamente a los mejores activistas, más posibilidades tiene de negociar mejores condiciones de un cambio de gobierno, manteniendo la continuidad constitucional, es decir, manteniendo intacto el sistema político y el aparato de Estado que reorganizó en los últimos 12 años.

Repliegue estudiantil en la UPOLI, asedio permanente en la UNAN

El sábado 9 de junio del 2018, los dirigentes del Movimiento Estudiantil 19 de Abril, que se habían atrincherado en la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI) tomaron la decisión de abandonar el recinto. Edwin Carcache, dirigente estudiantil, denunció la presencia de infiltrados del gobierno y declaró que "(…) nos retiramos de la universidad para ir a la calle a apoyar a la gente de los tranques, así como en su momento lo hizo la gente con nosotros cuando estuvimos dentro del recinto", (END 09/06/2018)

No es una desbandada, es un repliegue en orden, una decisión tomada después de largas discusiones, un correcto cambio de tácticas, la lucha pasa a otro nivel y en otras condiciones. La lucha contra el gobierno Ortega-Murillo fue iniciada por el movimiento estudiantil, pero solo fue el detonante, ahora se ha convertido en una lucha nacional, de amplio carácter popular. Una toma prolongada en el tiempo, aislada de las bases estudiantiles, aparta a la vanguardia juvenil de la lucha de masas que en las condiciones actuales se libra en los tranques y en los barrios. Al retirarse los estudiantes de la UPOLI, los infiltrados aprovecharon para destruir las instalaciones, lo que confirma las denuncias estudiantiles.

Ahora, solo los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) libran una dura batalla, prácticamente solos, atrincherados en la toma de las instalaciones del recinto UNAN-Managua, quienes son asediados todas las noches por francotiradores. Ya mataron al primero compañero, el objetivo es imponer el terror y la desmoralización, para que abandonen el recinto tomado.

Exhortamos a los estudiantes de la UNAN a discutir democráticamente cuales deben ser las mejores tácticas de lucha en este momento. Ellos sostienen heroicamente en este momento las banderas de la lucha estudiantil.

La visita fugaz de Caleb McCarry

El 9 de junio se filtró la información que Caleb McCarry, asistente del republicano Bob Corker, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, visitó Managua y se reunió con el presidente Daniel Ortega, en presencia de la embajadora norteamericana en Managua, Laura Dogu. McCarry fue coordinador

de la Comisión para la Transición en Cuba, cuyo principal objetivo era organizar una transición en Cuba. No es funcionario del Departamento de Estado, pero si del Senado de Estados Unidos, lo que indica que los senadores están preparando la aplicación de sanciones contra la familia Ortega-Murillo y sus allegados, por continuar resistiéndose a aplicar reformas democráticas, tal como ha solicitado la Casa Blanca.

Con esos antecedentes, no hay duda que Daniel Ortega, acorralado por la insurrección desarmada y la proliferación de tranques, negocia secretamente con los "golpistas" de Estados Unidos una transición. Tal vez a esto se deba el repentino silencio de la administración Trump y de la OEA sobre la continua matanza de civiles en Nicaragua. Pero todavía no hay acuerdos finales, ha sido la negativa a realizar reformas lo que ha provocado una crisis en las negociaciones, y lo que ha forzado a los empresarios a sumarse al Paro Nacional, para elevar el nivel de presión interno sobre el gobierno Ortega-Murillo.

Lucha democrática, orteguismo y antiimperialismo

Algunos honestos compañeros sandinistas de base siguen considerando a Daniel Ortega como un revolucionario, pierden de vista que desde 1990 muchos antiguos comandantes de la revolución se convirtieron en lo contrario, en representantes políticos de un nuevo sector burgués que emergió de la ruina de la revolución de 1979. Por eso aceptan la propaganda oficial, en el sentido que el gobierno Ortega-Murillo es víctima de un "golpe de Estado", orquestado por el imperialismo norteamericano.

No hay duda que sectores del imperialismo norteamericano presionan a Daniel Ortega para que haga reformas al sistema político y con ello calme la dinámica insurreccional.

No olvidemos que en 1978-1979, después de muchas suplicas de la administración de Jimmy Carter para que Anastasio Somoza abandonara el poder, y ante la resistencia de éste, Estados Unidos se vio obligado a impulsar sanciones en su contra. Somoza no era ningún revolucionario ni antiimperialista, era un dictador que había caído en desgracia, y Estados Unidos presionaba para que renunciara y de esta forma evitar el triunfo de la guerrilla sandinista, lo que afortunadamente ocurrió el 19 de julio de 1979. Las sanciones contra Somoza y la posterior prohibición de asilo en Estados Unidos, no lo transformaron en una persona progresiva, siguió siendo un asesino que huía de la justicia revolucionaria

Desde entonces, Estados Unidos aprendió la lección que debe intervenir antes de que ocurra un triunfo revolucionario como en 1979. Están muy preocupados por la dinámica insurreccional, a pesar que no hay armas para enfrentar el terror orteguista. Por eso presionan a Daniel Ortega, no para que abandone el poder, como sí lo hicieron con Somoza en 1979, sino para que realice cambios democráticos, dándole ciertas garantías a él y su familia. Ortega, al igual que Somoza, se resiste a hacer cambios en el régimen político.

Pero esta injerencia imperialista no convierte automáticamente a Daniel Ortega en revolucionario o antiimperialista, solo evidencia fuertes roces en torno al manejo de la crisis y sus resultados. Hasta hace poco, Daniel Ortega era un aliado ejemplar de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

En la lucha actual por la democratización de Nicaragua, toda acción que contribuya realmente a desarrollar la movilización y auto organización de las masas en lucha es bienvenida. Todavía no queda claro si habrá sanciones contra la familia Ortega-Murillo. Si estas llegasen a ocurrir, algo que no podemos descartar, si el Congreso de Estados Unidos o la administración Trump votan o aplican sanciones contra la familia Ortega-Murillo o sus allegados, por violaciones a los derechos humanos o por blanqueo de capitales, no debemos derramar una sola lagrima, pero debemos advertir al pueblo de Nicaragua el objetivo real de una maniobra de ese tipo: Estados Unidos, los empresarios del COSEP y la OEA trabajan en un frente común que no persigue el derrocamiento revolucionario del gobierno Ortega-Murillo, sino que procuran una salida en el marco constitucional, como el adelanto las elecciones, para evitar el derrumbe total del Estado como ocurrió en 1979.

Seguir los ejemplos de Masaya, León y Jinotepe

Dos ciudades, antiguos bastiones del FSLN en la insurrección de 1979, Masaya y León, nos indican el camino a seguir. En Masaya expulsaron a todos los funcionarios del gobierno Ortega-Murillo, incluido el alcalde, y las masas insurrectas, con el barrio indígena de Monimbó a la vanguardia, instauraron sin muchas solemnidades un gobierno local de luchadores. Este gobierno mantiene el orden en la ciudad.

En León, diferentes organizaciones sociales, convocaron a un Paro departamental, el que se está cumpliendo el día de hoy, 12 de junio del 2018. Es un Paro local pasivo, nadie está en las calles, pero para que sea efectivo debe extenderse a nivel departamental y nacional, instaurando un gobierno local como se hizo en Masaya.

En Jinotepe, a pesar de los repetidos intentos de quebrar los tranques, las masas en lucha han resistido, han expulsado a las fuerzas de choque y en los hechos han establecido un gobierno local.

Convertir el Paro Nacional en insurrección general

Los empresarios del COSEP y ANCHAM al sumarse al Paro Nacional en realidad lo que hace es un lock out (cierre de empresas). Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llamamos a que los trabajadores, tanto del sector privado como del sector público, a sumarse a la lucha de los tranques de manera organizada, por medio de asambleas populares, creando comités en los barrios, para que mantengan el orden, el abastecimiento y organicen la autodefensa.

Por una Concejo Nacional de Luchadores

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llamamos a los trabajadores, jóvenes y demás sectores populares a convocar y ejecutar un Paro Nacional, e instaurar gobiernos locales formado por representantes de las organizaciones de luchadores, para instaurar gobiernos locales, departamentales, liberando territorios, de la misma manera que se hizo en 1979.

Solo una Coordinadora o Concejo Nacional de Luchadores, con delegados de las organizaciones o comités que están el frente de los tranques, puede llevar a cabo esta enorme tarea de construir una dirección centralizada, que responda de manera coordinada a las embestidas represivas del gobierno.

Este Consejo Nacional de Luchadores debe postularse como una alternativa de gobierno, diferente al que están negociando los empresarios.

Creación de Brigadas de Autodefensa

Llamamos a la formación de Brigadas de Autodefensa para defender los barrios y tranques del terror que pretenden imponer las fuerzas de choque del FSLN. Estas Brigadas o comités de autodefensa deben mantener el orden en los territorios liberados, y deben recopilar todo tipo de armamento que permita organizar la defensa ante los ataques

criminales de las fuerzas de choque del FSLN.

Centroamérica, 12 de junio del 2018

Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)
Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)

VII.-

UN PROGRAMA ALTERNATIVO PARA DEMOCRATIZAR NICARAGUA EN BENEFICIO DE LOS TRABAJADORES, ESTUDIANTES Y SECTORES POPULARES

Desde mediados de abril del 2018, Nicaragua está siendo sacudida por una intensa actividad de masas, un genuino proceso de revolución democrática que, a pesar de las continuas masacres, involucra cada vez más a amplios sectores sociales que luchan conjuntamente para poner fin al régimen totalitario instaurado por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.

1.- Estallan pugnas interburguesas

Después de muchos años de férreo control del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) sobre el conjunto de la sociedad nicaragüense, la lucha contra las inconsultas reformas a la seguridad social, desató la rebelión estudiantil que rápidamente se convirtió en una semi insurrección popular, que a sangre y fuego fue detenido temporalmente por el gobierno Ortega-Murillo.

Fue así que la rebelión estudiantil encendió la llama del levantamiento popular. La crisis del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) pasó a un segundo plano. El clamor popular era y sigue siendo terminar con el asesino gobierno Ortega-Murillo.

La lucha estudiantil y popular destapó la crisis interburguesa que se venía gestando tiempo atrás, y que solo eran simples rumores en los pasillos de las cámaras empresariales. A pesar que desde el año 2007,

para consolidar su régimen bonapartista, Daniel Ortega mantuvo una estrategia política de "alianzas, diálogos y consensos" con los grandes grupos económicos y la oligarquía financiera, que le permitió aprobar leyes y hacer jugosas concesiones económicas y fiscales, en el último periodo los grupos empresariales se quejaban de la corrupción y de la "competencia desleal".

La masacre estudiantil de abril del 2018, y la semi insurrección obligaron a los grandes grupos económicos (Pellas, Coen, Chamorro, Baltodano y banqueros), al Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AMCHAM), a distanciarse del gobierno Ortega-Murillo y a subir el tono de sus reclamos.

2.- La ACJD: ¿Alianza táctica o Estratégica con los Empresarios?

En los últimos 12 años, la percepción popular ha sido que los empresarios del COSEP han colaborado con Daniel Ortega a cambio de la buena marcha de sus negocios, y que esto ha permitido consolidar su dictadura. El fenómeno de la semi insurrección de abril, y la posterior masacre, forzó a los empresarios a cambiar el discurso y a exigir lo que han llamado "democratización". En la medida que se terminó el alegre flujo de petrodólares de la cooperación venezolana, los empresarios comenzaron a hablar de reinstaurar la democracia, y a convocar a marchas pacíficas de protesta contra el gobierno.

La rebelión estudiantil de abril produjo el colapso de la anquilosada dirección burocrática de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), bajo el férreo control sandinista, y el surgimiento de nuevas e improvisadas direcciones del movimiento estudiantil, algunas de ellas ligadas a los ONGs que desarrollan algún tipo de lucha social. Estos ONGs autodenominados "sociedad civil" y las nuevas direcciones estudiantiles, establecieron una alianza con los empresarios del COSEP, para luchar contra el gobierno

El día 11 de mayo del 2018, antes de la instalación formal del Dialogo Nacional el día 16 de mayo, fue dada a conocer la constitución de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), compuesta por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), el COSEP, AMCHAM, una alianza de grupos estudiantiles, el movimiento campesino anti canal interoceánico, organizado en el Consejo Nacional en Defensa de Nuestra Tierra, Lago y Soberanía, y

otros grupos sociales.

En la lucha por la democratización de Nicaragua es válido establecer alianzas tácticas con diferentes grupos sociales, incluidos los empresarios del COSEP y AMCHAM, siempre con el objetivo de procurar la movilización popular que permita el derrocamiento del gobierno Ortega-Murillo. Una vez que se logre el objetivo central, ahí se deben acabar las alianzas tácticas.

Por ello insistimos que las organizaciones estudiantiles y demás grupos sociales que participan en la ACJD, como el movimiento campesino anticanal y otros grupos, bajo ninguna circunstancia deben supeditarse a la política y los intereses de los empresarios del COSEP. A nuestro criterio deben mantener en todo momento una posición independiente que defienda los intereses de los sectores sociales que representan, para evitar que el proceso de revolución democrática en curso sea negociado o traicionado.

Al comienzo, la alianza se produjo en torno a la consigna de renuncia del gobierno Ortega-Murillo, una demanda popular, lo cual era correcto: ¡todos contra el gobierno!. Posteriormente, sin consultar a sus bases, la alianza táctica con los empresarios del COSEP se convirtió en una alianza estratégica, que se produjo alrededor del documento conocido como "Agenda para la Democratización de Nicaragua", el cual fue presentado en la sesión del Dialogo Nacional del día 23 de mayo del 2018. Como era de esperarse, el gobierno Ortega-Murillo se resistió inicialmente a hacer concesiones, suspendiendo temporalmente las negociaciones, acusando a la ACJD de impulsar un "golpe de Estado".

Si bien es cierto que, en momentos de auge de la lucha popular, debemos cerrar filas contra el gobierno Ortega-Murillo, es lamentable observar cómo, a partir de la instalación del Dialogo Nacional, algunos dirigentes de las cinco agrupaciones que forman la Coalición Universitaria que participan en la ACJD han perdido el impulso democrático, limitando su autonomía e independencia política, subordinándose a las políticas y estrategias del COSEP y AMCHAM.

Pero no todas las nuevas dirigencias estudiantiles han sido neutralizadas. Todavía existen dirigentes realmente independientes, y esperamos que sean la mayoría. En una reciente entrevista, el dirigente universitario Harley Morales, expresó el malestar de una parte de los nuevos dirigentes y se mostró muy crítico con el comportamiento de algunos delegados estudiantiles en el reciente viaje a la Asamblea de la OEA, realizada en Washington: "(…) Este viaje fue financiado desde Estados Unidos (Freedom Foundation) y se les impuso una agenda, y

eso es terrible. Fueron ellos quienes decidieron qué estudiantes irían (…) No sabíamos de las reuniones con Ted Cruz, con Ileana Ross ni con Marco Rubio. Tenemos un gran descontento con eso. Cuando vengan los muchachos, vamos a hablar con ellos. No podemos ceder en lo fundamental (…)". (El Faro, 10/06/2018)

En relación a la alianza con el COSEP, Harvey Morales aclaró que "(…) Sabemos que cuando el COSEP no nos necesite, nos van a descartar. Pero nosotros tenemos otros planes. (…) A los empresarios los tenemos como aliados de cara al diálogo, pero no tenemos confianza. Una vez fuimos muy claros a ellos: les dijimos que temíamos que el diálogo fuera un show mediático y que el verdadero diálogo se estuviera haciendo bajo de la mesa. Esa es una sospecha latente. (…) La historia nos dice que no debemos supeditarnos a la agenda política y económica del empresariado y sabemos que nos dejarán en la calle. Sabemos el riesgo en el que caemos por estar recibiendo su apoyo. Creen que nos pueden pedir algo a cambio. Nosotros insistimos en justicia y democracia, y hay algunas cosas que decimos que no les han gustado. (…)". (Op Cit)

Esta visión lucida contiene una sana y natural desconfianza a los empresarios del COSEP, antiguos aliados del gobierno de Daniel Ortega. Esta debería ser la actitud predominante de la dirigencia estudiantil y de los movimientos sociales que participan en la ACJD, ya que existe la posibilidad real e inminente que los empresarios lleguen a un acuerdo con el gobierno Ortega-Murillo para impulsar elecciones adelantadas, como un mecanismo para evitar una insurrección general que derroque al gobierno Ortega-Murillo

3.- El abandono de la consigna de la renuncia del gobierno Ortega-Murillo

En esta alianza de la Coalición Universitaria con el COSEP, observamos que la primera claudicación se produjo cuando se abandonó la consigna de la renuncia de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, siendo sustituida por el primer punto de la "Agenda de Democratización" presentada por los obispos en la sesión del Dialogo Nacional del día 23 de mayo del 2018.

El primer punto de la Agenda de Democratización de la ACJD se refiere a la realización de: "Elecciones libres y mecanismos constitucionales para la celebración de un procesal electoral justo y transparente (…) Reforma parcial de la Constitución Política a fin de adelantar las elecciones presidenciales, municipales, legislativas y de

las regiones autónomas, a la mayor brevedad posible (…) 2.- Adelanto y convocatoria a elecciones generales de autoridades sujetas a elección popular. 3.- Reducción del período de las autoridades de los poderes del Estado (…)"

Se abandonó la exigencia de la renuncia de Daniel Ortega y Rosario Murillo, para dar paso a la realización de elecciones, previa reforma a la Constitución. La exigencia de la renuncia del gobierno Ortega-Murillo no aparece por ningún lado, no fue colocada como el principal punto de agenda. Al contrario, la propuesta de elecciones adelantadas, permitiría al FSLN reorganizarse, y mantener importantes cuotas de poder en los poderes e instituciones del Estado.

Todos los demás puntos, como reforma constitucional para prohibir la reelección presidencial, reestructuración de los poderes del Estado, nueva ley de partidos políticos, son secundarios porque dependen del resultado de las elecciones anticipadas.

Ahora bien, la Agenda de Democratización de la ACJD también contempla que "(…) 3.- las nuevas autoridades del CSE, CSJ y de la CGR son nombrados producto del Consenso de la mesa del Diálogo". Este punto no queda claro si es antes o después de la hipotética convocatoria de elecciones generales anticipadas. Si es antes, significaría que, utilizando el método del consenso, los nuevos magistrados serian repartidos, otorgando una cuota a cada sector dentro del Dialogo Nacional, lo que implicaría que el FSLN tendría la mitad de los magistrados. Si es después de las elecciones generales, es una medida antidemocrática porque contradeciría al resultado de la voluntad popular en las elecciones.

4.- ¿Orteguismo sin Ortega?

Mientras los estudiantes y sectores populares pelean en las calles, los empresarios del COSEP conspiran para evitar el triunfo de una nueva revolución, como la que ocurrió en 1979, con la diferencia que en el actual proceso revolucionario no hay una organización guerrillera que la dirija.

Es un proceso masivo y espontaneo de rebelión y luchar popular, que no tiene una conducción reconocida ni centralizada. Quizá en es este aspecto esta la mayor fortaleza, y debilidad al mismo tiempo, de la revolución democrática en curso.

La ACJD no es la conducción de la lucha cotidiana en las barricadas, pero si es el sector que está negociado, y dentro del mismo los empresarios del COSEP han tomado el control e imponen la agenda y la dinámica a seguir. Es una enorme contradicción, por eso es que el rumbo de las negociaciones no refleja la dinámica insurreccional del movimiento popular.

Igual que en 1979, tenemos sectores que intentan torcer el rumbo de la revolución, negociando una "salida constitucional", es decir, una salida que preserve los pilares fundamentales del Estado, como son el Ejército Nacional y la Policía Nacional.

Después de la liberación de ciudades como Masaya, Jinotepe, Diriamba y León, no cabe la menor duda que el gobierno está moribundo, importantes sectores de masas se han rebelado, pero todavía no ha muerto. El sistema político sigue intacto.

La escalada represiva de Daniel Ortega en los últimos días pretende crear las condiciones para que el pueblo insurrecto acepte como "mal menor" un adelanto de las elecciones, pero hasta noviembre del 2019, es decir, dentro de año y medio, lo que da un tiempo prudencial al FSLN para reorganizar sus fuerzas.

Este es el plan que el gobierno Ortega-Murillo ha presentado a Estados Unidos y la OEA, y que estos han aceptado en términos generales, lo que le permitiría al orteguismo negociar los poderes e instituciones del Estado, hacer algunos cuantos cambios formales, calmar a los empresarios del COSEP, quedar bien parado con el imperialismo norteamericano para que no le congelen los activos a la familia Ortega-Murillo, mantener el control de la Policía y el Ejercito, en pocas palabras, un orteguismo sin Daniel Ortega, pero conservando éste una altísima cuota de poder.

El problema es que, si revisamos con lupa la Agenda de Democratización presentada por la ACJD en el Dialogo Nacional, coincide parcialmente con el plan acordado con la OEA y Estados Unidos, porque en la misma ya no se plantea como punto central la renuncia del gobierno Ortega-Murillo, sino que está centrada en el tema del adelanto de las elecciones y la realización de importantes reformas democráticas.

5.- Propuesta de Programa Alternativo para democratizar Nicaragua en beneficio de los más pobres

La Agenda de Democratización de la ACJD no plantea ni una sola reivindicación estudiantil o popular. A pesar que el movimiento campesino anticanal es una de las organizaciones más importantes que participan dentro de la ACJD, no hay una sola reivindicación a favor de los campesinos y su lucha.

Por ello necesitamos con urgencia un programa que unifique a la mayoría del pueblo en torno a las reivindicaciones democráticas que satisfaga las aspiraciones de los sectores sociales en lucha.

Por ello, para contribuir al triunfo de la lucha que actualmente se libra en las calles, hemos considerado conveniente someter a consideración de la vanguardia estudiantil y de los sectores populares en lucha, el siguiente programa:

5.1.- ¡!Abajo el gobierno Ortega-Murillo!!

La consigna que ha unificado a la mayoría del pueblo es la exigencia de la renuncia del gobierno Ortega-Murillo, esta consigna, que ha sido abandonada en los hechos por la ACJD, debe mantenerse porque es el gran clamor popular.

5.2.- ¡!Adelante con la insurrección popular!!

Si no quieren renunciar debemos continuar profundizando la dinámica insurreccional, organizando milicias o brigadas de autodefensa, liberando municipios, avanzando con los tranques, constituyendo gobiernos locales, hasta liberara todo el territorio nacional.

Exhortamos a los miembros de la Policía y del Ejercito a no disparar contra el pueblo, y más bien rendirse como ha ocurrido en ciudades como León, Jinotepe y Masaya o, en el mejor de los casos, sumarse a la insurrección popular.

5.3. ¡!No a elecciones anticipadas bajo la existencia del gobierno Ortega-Murillo!!

El inminente anuncio de elecciones anticipadas para el año 2019, es parte del plan que Daniel Ortega negoció recientemente con el gobierno de Estados Unidos y con la OEA. Este plan pretende mantener con vida el represivo sistema orteguista, pero sin la presencia visible de la pareja Ortega-Murillo. Con ello intentan detener la dinámica insurreccional que actualmente se desarrolla en casi todo el país, y volcarla hacia las urnas electorales. En ese sentido, el anuncio llega muy tarde.

En condiciones normales, las elecciones anticipadas serian un mecanismo para que el pueblo decida democráticamente el futuro o la composición del gobierno, pero actualmente tenemos un proceso insurreccional que, a nuestro juicio, después de tanta represión y sangre derramada, ya no debe detenerse y debe culminar la grandiosa tarea de demoler el aparato represivo que los sucesivos gobiernos de Daniel Ortega construyeron en los últimos 12 años. Vistos los antecedentes de fraudes electorales, un requisito básico para la realización de elecciones democráticas es que desaparezca el gobierno Ortega-Murillo.

5.4.- ¡!Por un gobierno de los luchadores!!

La exigencia de la renuncia del gobierno Ortega-Murillo, si llegamos a imponerla, nos plantea inmediatamente el desafío y la interrogante de que fuerza es la que debe asumir provisionalmente el gobierno.

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) consideramos que quienes deben asumir el gobierno son las fuerzas sociales que participan activamente en la insurrección, es decir, los luchadores, los estudiantes y campesinos descalzos, los que han estado realmente al frente de la lucha.

Por ello hemos insistido que, desde los municipios y ciudades liberadas, se extienda esta experiencia de autogobierno a todo el país, y se elijan delegados de forma piramidal, de abajo hacia arriba, hasta constituir un Consejo Nacional de Luchadores, que son los que deben asumir el control y nombrar un gobierno provisional, encargado de convocar a elecciones para Asamblea Nacional Constituyente.

5.5.- ¡!Por una Comisión Independiente que investigue las masacre, crímenes y actos de corrupción cometidos por el gobierno Ortega-Murillo!!

Una comisión compuesta por luchadores populares y familiares de las víctimas debe hacer las averiguaciones necesarias para determinar las responsabilidades y castigar a los funcionarios o civiles culpables. El gobierno Ortega-Murillo está negociando una amnistía general que le permita evitar el deslinde de responsabilidades. Debemos oponernos a cualquier intento de amnistía y exigir juicio y castigo a los culpables.

De igual manera, planteamos que todas las denuncias de corrupción y enriquecimiento ilícito, como la ocurrida con los fondos de Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y otras instituciones del Estado, deben ser investigadas, y esos recursos sustraídos ilegalmente deben ser restituidos a dichas instituciones del Estado.

5.6.- ¡!Reorganización total de los poderes e instituciones del Estado!!

Una vez instaurado un gobierno provisional revolucionario, se debe proceder a la reorganización de todos los Poderes e instituciones del Estado, bajo la premisa básica de que cualquier alto funcionario debe ser electo directamente por el pueblo, debe ganar el salario de un obrero calificado, y su mandato puede ser revocado en cualquier momento.

Para evitar la corrupción, todos los magistrados y jueces deben ser electos directamente por el pueblo en cada distrito electoral, sea por medio de asambleas o urnas electorales, y revocados cada vez que sus electores lo consideren conveniente.

5.7.- ¡!Disolución de la Policía Nacional y sustitución por una Policía comunitaria!!

Bajo el gobierno Ortega-Murillo la Policía Nacional se convirtió en un pequeño ejército asesino, encargado de reprimir a quienes luchaban por la democratización del país. Esta Policía se alejó del pueblo y, por lo tanto, debe ser disuelta y sustituida por una nueva Policía Comunitaria, basada en el voluntariado de los pobladores en los diferentes barrios.

5.8.- ¡!Derecho al trabajo y plena libertad sindical!!

Debemos luchar por amplias libertades democráticas de los trabajadores, tanto del sector público y privado, garantizado el derecho de libre organización sindical. El empleo de los trabajadores del Estado no debe estar vinculado a la afiliación de un partido político, todos tenemos derecho al trabajo, independientemente de nuestra ideología o afiliación partidaria. Nadie debe ser obligado a participar en actividades políticas en contra de su voluntad, ni echado de su puesto de trabajo por sostener determinadas posiciones políticas o ideológicas.

5.9.- ¡!Defensa de la autonomía universitaria!!

Se requiere una nueva Ley de Autonomía de las Universidades, que garantice la libertad de catedra y los derechos democráticos y de autogobierno de los estudiantes, trabajadores y personal administrativo.

De igual manera, debemos luchar para que la nueva Constitución se establezca el 10% del presupuesto del Estado a favor únicamente de las universidades públicas, para garantizar el derecho a una educación superior de calidad a los jóvenes pobres o de escasos recursos.

Llamamos a todos los grupos a universitarios a unirse para construir una nueva federación de estudiantes universitarios, democrática, libre, cuyo gobierno sea electo por medio de asambleas en cada recinto. UNEN debe ser disuelta y sus bienes deben pasar a las nuevas organizaciones estudiantiles.

Se deben recuperar el auto gobierno, el manejo transparente del presupuesto universitario, debemos elegir nuevas autoridades en todas las universidades públicas, con la participación de estudiantes, profesores y trabajadores, sin injerencia del gobierno y con absoluta independencia del Estado, también debemos restaurar la absoluta libertad de catedra.

5.10.- ¡!Derogación de la Ley No 840!!

La Ley No 840 fue aprobada en contra de la voluntad de decenas de miles campesinos que se niegan a entregar sus tierras. La construcción del canal interoceánico fue un engaño bien elaborado, con el objetivo de mantener ilusiones de grandeza y desarrollo económico, mientras se instauraban un régimen dictatorial El objetivo real de la Ley No 840

es expropiar valiosas tierras, indemnizadas a precios ridículos, para crear "proyectos y subproyectos" desconocidos a favor de empresarios capitalistas igualmente desconocidos.

5.11.- ¡Aumento de salarios conforme suba el costo de la vida!

Los trabajadores nicaragüenses ganan los salarios más bajos de Centroamérica, cuando los precios de los productos de la canasta básica, servicios básicos (agua, luz y telecomunicaciones) y gastos médicos están dolarizados. En la nueva Nicaragua se debe indexar los salarios al costo de la vida, y se debe reconocer el deslizamiento mensual del córdoba en relación al dólar.

5.12.- ¡Por una nueva reforma agraria con financiamiento y asistencia técnica!

El proceso de reforma agraria de la revolución (1979-1990) ha sido revertido en el transcurso de los años. Las mejores tierras han quedado nuevamente en pocas manos, especialmente en manos de la nueva burguesía sandinista.

Se debe impulsar una nueva reforma agraria, sin condicionamientos políticos, entregar tierras a los campesinos para que las trabajen. Llamamos a los campesinos a organizarse en comités, sin distingos políticos, con el objetivo de garantizar una justa distribución de la tierra. De igual manera, se debe garantizar el financiamiento por parte del Estado, con bajos intereses, para promover el desarrollo de la economía campesina.

5.13.- ¡Por la nacionalización de la banca, pero bajo control de los trabajadores!

Después de 1990, se creó una banca privada conformada por un reducido grupo de oligarcas, quienes manejan el sistema financiero. Esta oligarquía financiera tiene las tasas de interés más altas de Centroamérica, y por ello explotan y convierten en esclavos a decenas de miles de productores pequeños y medianos, quienes en realidad trabajan para pagar altísimos intereses.

Es hora de acabar con esta descarada expoliación de las masas populares. Todos los bancos privados deben ser nacionalizados, sin indemnización, y puestos a funcionar bajo la dirección de sus propios trabajadores, con el objetivo de promover la producción y el comercio en condiciones justas.

5.14.- ¡Por la nacionalización de la industria eléctrica y la comercialización de hidrocarburos!

Es del conocimiento público que alrededor de 5,000 millones de dólares del convenio petrolero con Venezuela, ha sido utilizado de manera privada para enriquecer a la familia Ortega-Murillo, millones de dólares que han sido invertidos en áreas estratégicas de la economía, como la industria eléctrica y la comercialización de combustibles e hidrocarburos, creando monopolios que expolian a la nación entera.

Es así que Nicaragua tiene los precios más elevados de energía eléctrica y de venta de combustibles. La energía es una necesidad vital en cualquier sociedad. Por ello, proponemos que estas dos áreas de la economía sean nacionalizadas, y puestas a funcionar bajo control de los trabajadores, los únicos que pueden evitar la corrupción y los sabotajes, los únicos interesados en defender sus puestos de trabajo.

5.15.- ¡Por una verdadera autonomía para la Costa Caribe!

El actual Estatuto de la Autonomía de las regiones de la Costa Caribe no permite a los habitantes de esa zona, disponer de los recursos naturales y decidir sobre los mismos. Por eso la autonomía de la Costa Caribe es todavía una ilusión de los miskitos, sumos, ramas y creoles. Se deben hacer todos los cambios legales que permitan a los hermanos de la Costa Caribe, hacer realidad ese sueño, que preserve sus tradiciones, idiomas, costumbres y cultura.

5.16.- ¡Por una reestructuración y democratización del Ejercito Nacional!

Hasta el momento el Ejército Nacional, que tiene su origen en las columnas guerrilleras de 1979, no ha intervenido abiertamente contra

del proceso insurreccional, pero el uso de francotiradores nos obliga a investigar a la alta oficialidad. El Ejercito ha sido "neutral", permitiendo que grupos armados de paramilitares ataquen los tranques y las manifestaciones. Ha colaborado con las masacres por omisión. Todos aquellos altos oficiales que hayan participado en crímenes contra el pueblo deben ser detenidos y procesados.

Exhortamos a los soldados a que, mediante asambleas, elijan a sus oficiales. El Ejercito debe ser un aparato reducido, compuesto en su mayoría por milicias populares, gente del pueblo adiestrada en el uso de las armas. Solo de esta manera se evitará que el Ejercito dispare contra el pueblo.

5.17. ¡Por una Asamblea Nacional Constituyente, Libre y Soberana!

Rechazamos la propuesta de elecciones anticipadas porque pretende detener el triunfo de la insurrección popular contra el gobierno Ortega-Murillo. Primero debemos aplastar al gobierno asesino, y una vez cumplida esta tarea aplicar las reformas democráticas al sistema electoral para garantizar la participación de todas las fuerzas políticas y sociales en elecciones para elegir diputados a una Asamblea Nacional Constituyente, libre y soberana.

En esta elección, los luchadores populares y las organizaciones sociales deben tener el derecho a presentar sus propios candidatos, sin necesidad de estar afiliados a ningún partido político. Mientras se redacta la nueva Constitución, esta Asamblea Nacional Constituyente debe elegir al nuevo gobierno, quien debe responder por sus actos ante la propia Constituyente.

5.18.- ¡Por la reconstrucción del Estado Federal Centroamericano!

Un posible triunfo popular en Nicaragua puede desencadenar acciones contrarrevolucionarias en Centroamérica, por eso la lucha democrática en Nicaragua, debe ligarse a la lucha por terminar con el gobierno dictatorial de Juan Orlando Hernández en Honduras, para terminar con el gobierno corrupto y represivo de Jimmy Morales en Guatemala, para terminar con el desastroso gobierno neoliberal del FMLN en El salvador, y unirnos a nuestros hermanos de Costa Rica, para

detener todos los planes neoliberales del gobierno de Carlos Alvarado.

Como en 1979, cualquier triunfo democrático en Nicaragua, nos plantea la necesidad de reconstruir el Estado Federal en Centroamérica y restablecer la nación centroamericana.

5.19.- ¡Repudiemos cualquier injerencia del imperialismo norteamericano!

Tradicionalmente, Estados Unidos ha amamantado las dictaduras en Nicaragua. Con el gobierno Ortega-Murillo ha tenido una relación de apoyo crítico y tolerancia. Ahora que se desarrolla la insurrección popular, igual que en el pasado, Estados Unidos conspira con los empresarios del COSEP y la OEA para mantener el orden y el statu quo, y solamente presiona a Ortega-Murillo para que realice cambios democráticos, solo para arrebatarnos un posible triunfo de la insurrección popular.

Llamamos a los trabajadores nicaragüenses, a los luchadores, a mantenerse alertas ante las innumerables maniobras políticas que realizará el imperialismo norteamericano, a través de la OEA y de sus agentes políticos. Llamamos a enarbolar las banderas del antimperialismo hasta lograr nuevamente nuestra independencia política, como primer paso para la liberación total de Centroamérica.

****

Sometemos esta propuesta de Programa a consideración de los luchadores, estudiantes, trabajadores, campesinos e indígenas, de Nicaragua y resto de Centroamérica. Llamamos a la vanguardia revolucionaria a marchar unidos sobre los puntos comunes, y a debatir democráticamente cualquier posible diferencia, la que debemos resolver en la marcha de la lucha democrática.

Centroamérica, 14 de junio del 2018

Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)
Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)

VIII.-

8 MESES DESPUÉS: LA DICTADURA ORTEGA-MURILLO SE AFERRA AL PODER, TRUMP IMPONE SANCIONES…. ¿QUÉ DEBEMOS HACER?

Han trascurrido más de 8 meses, desde aquel 19 de abril del año 2018, cuando el gobierno Ortega-Murillo decidió masacrar la protesta estudiantil, provocando un masivo levantamiento popular que estuvo en condiciones de imponer un cambio de gobierno. Muchos acontecimientos importantes han ocurrido en estos meses. El cambio de la situación, el aplastamiento de la insurrección desarmada, puede hacernos olvidar las principales lecciones de estas gloriosas jornadas de lucha.

1.- Estallido social y ofensiva revolucionaria de las masas

En ese momento, después de soportar durante 11 años un régimen bonapartista que se transformaba rápidamente en una dictadura, finalmente las masas rompieron las cadenas de la opresión y estaban a la ofensiva, mientras la dictadura se colocaba a la defensiva. De repente se abrió una situación revolucionaria en donde estuvo a la orden del día el problema de quien detentaría el poder.

En las calles, la mayoría de la población exigía la renuncia del gobierno Ortega-Murillo, reflejando una creciente radicalización de la clase media y los sectores populares. Las marchas contra el gobierno agrupaban a decenas de miles de manifestantes enardecidos.

1.1.- La ACDJ y el Dialogo Nacional: el fracaso del "aterrizaje suave"

Los empresarios del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), la Cámara de Comercio Americana Nicaragüense (AMCHAM) y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES) antiguos aliados estratégicos del gobierno Ortega-Murillo, dieron un bandazo, se pasaron a la oposición, y temerosos de ser desbordados por el movimiento de masas, impulsaron la creación de la Alianza Cívica por la Democracia y la Justicia (ACDJ) con algunos sectores de la sociedad civil y diversas organizaciones estudiantiles que fueron creadas al calor del estallido social.

El principal propósito de la ACDJ era imponer una negociación política al gobierno Ortega-Murillo, a través de un Dialogo Nacional, con el objetivo de lograr el llamado "aterrizaje suave", es decir, la salida voluntaria del matrimonio presidencial, para convocar a elecciones anticipadas y que todo volviese a la normalidad. En pocas palabras, lograr la transición hacia un sistema político basado en las instituciones represivas del orteguismo, pero sin la odiada figura de la pareja presidencial.

Presionado por la movilización en las calles, el gobierno Ortega-Murillo accedió a convocar al Dialogo Nacional, aceptó que la Iglesia Católica fuese la mediadora, realizó todo tipo de maniobras para ganar tiempo, esperando señales de cansancio de las masas.

Pero el "aterrizaje suave" fue abortado, no tanto por la obcecación de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que se resistían a hacer concesiones, sino por la movilización de masas que impidió la concretización de los acuerdos secretos entre la dictadura y los principales grupos económicos y la oligarquía financiera y bancaria.

1.2.- El rol de dirección de los movimientos sociales

Tras 11 años de control absoluto sobre la sociedad, el régimen bonapartista de Daniel Ortega y Rosario Murillo, no solo habían establecido las bases de una dictadura dinástica, ilegalizando a los partidos políticos opositores, destituyendo a sus diputados, sino que había mantenido arrinconados a los movimientos sociales, con las únicas excepciones del movimiento campesino anti canal y de algunos movimientos feministas, los que había logrado desarrollar importantes movilizaciones.

El estallido social o insurrección de abril generó un amplio proceso de auto organización de las masas, especialmente del sector estudiantil, que durante décadas había estado bajo el control absoluto de la Unión Nacional de Estudiantes de Secundaria (UNEN).

Antes de abril se había conformado discretamente la Articulación de Movimientos Sociales (Articulación), que agrupaba a la mayoría de ONGs y movimientos sociales. Ante la ausencia de sindicatos de trabajadores beligerantes, y de la inexistencia de fuerzas y grupos de izquierda, el vacío de dirección fue llenado por los movimientos sociales. Una parte de este vigoroso proceso de autoorganizacion fue captado por los movimientos sociales que participaban en la ACDJ, pero la mayoría de estos movimientos sociales, engrosados con la movilización popular, se organizaron alrededor de la Articulación, que se convirtió en los hechos en la dirección de las movilizaciones que tumbaron el "aterrizaje suave".

En este proceso de fortalecimiento de la Articulación, debemos anotar que los aparatos de los ONGs fueron rebasados por el refrescante proceso de auto organización de las masas en los territorios y en los diversos sectores sociales. Este espontaneo proceso de autoorganizacion de las masas encerraba, no obstante, una enorme debilidad: carecía de una dirección centralizada. Por su propia naturaleza, los movimientos sociales no son conspirativos ni centralizados, características que se convertían en debilidad al momento de enfrentar al aparato represivo de la dictadura orteguista.

Con todas las cualidades y debilidades anotadas, la Articulación no solo se convirtió en el aglutinante del proceso de auto organización de las masas, sino también el objetivo principal de la represión de la dictadura.

1.3. El aplastamiento de la insurrección desarmada

La instalación del Dialogo Nacional fue una maniobra distractora de la dictadura. Duro solo un mes, del 16 de mayo al 16 de junio. El inicio del Dialogo Nacional coincidió con un proceso de establecimientos de tranques (barricadas en las carreteras y caminos) y con barricadas en las principales ciudades.

Los meses de mayo y junio reflejaron el proceso culminante de una insurrección popular desarmada, que se enfrentaba sin armas al aparato represivo de la dictadura, y que tenía como únicas armas los morteros

caseros, los tranques y barricadas, que llegaron a semiparalizar la economía.

En la medida en que se acrecentaba la represión, los tranques y barricadas se convirtieron en el baluarte de la insurrección. La autoorganización popular giraba en torno a la defensa de los tranques y barricadas. Las ciudades o barrios liberados se defendían con tranques y barricadas. Este proceso reflejó un incipiente poder dual que no llegó a desarrollarse ni centralizarse, ni a convertirse en una Junta de Gobierno Provisional, por la ausencia de una dirección revolucionaria que orientara a las masas. Incluso, en muchos casos la realidad obligó, a pesar del discurso pacifista de la ACDJ, a la creación de milicias de autodefensa, pero no llegaron a generalizarse. La destrucción de estos embriones de poder dual, junto con tranques y barricadas, se convirtió en una prioridad para la dictadura.

La terminación del Dialogo Nacional el 16 de junio, marcó el inicio de la contraofensiva militar de la dictadura orteguista contra la revolución desarmada y los tranques y barricadas. Durante un mes, hasta proclamar su victoria militar en la celebración del 19 de julio, Daniel Ortega dirigió a las tropas especiales de la Policía Nacional, apoyados por grupos paramilitares encapuchados, en el proceso de aplastamiento militar y recuperación gradual de los pueblos y ciudades insurrectos, masacrando a quienes ofrecían resistencia. El objetivo era claro: destruir a balazos las expresiones de poder dual en los pueblos y ciudades.

El resultado de dos insurrecciones, la primera que fue reprimida en abril, y la segunda que se desarrolló posteriormente entre mayo y junio, y que fue aplastada militarmente entre junio y julio, fue de más de 500 muertos, más de 2,000 heridos y centenares de desaparecidos.

1.4.-Estados Unidos, la OEA y la Unión Europea cerraron los ojos

Mientras duró la fase de ascenso revolucionario de las masas, la actitud del gobierno de Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA), así como de la Unión Europea (UN) fue de condenar la represión y llamar al Dialogo Nacional. Las declaraciones de condena fueron subiendo de tono conforme se conocieron los resultados oficiales de la misión de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), pero en este periodo, cuando más se necesitaron acciones reales que debilitasen a la dictadura orteguista y evitasen la

masacre, ningún gobierno se atrevió a romper relaciones diplomáticas con Nicaragua, todos se negaron a que las sedes diplomáticas diesen asilo a los activistas perseguidos.

Todos los gobiernos del mundo apostaron a que la dictadura terminaría aceptando la auto reforma del régimen político y que tarde o temprano se materializaría la negociación política, pero al darle un margen de tiempo a la dictadura, permitieron en los hechos que esta aplastase militarmente a la insurrección desarmada, creando un cambio en la correlación de fuerzas.

Un dato alarmante de este periodo es que mientras la dictadura asaltaba militarmente a los tranques y barricas, los grandes contribuyentes (grandes grupos económicos) siguieron pagando puntualmente los impuestos, y con ello contribuyeron a que la dictadura tuviese los fondos necesarios para pagar los salarios de las tropas policiales y los grupos paramilitares.

En los hechos, no en los discursos, los gobiernos del mundo coincidieron con los grupos económicos de Nicaragua, en la necesidad de evitar el derrocamiento revolucionario de la dictadura orteguista. Todos, sin excepción, desee diferentes puntos de vista, temían profundamente a que se repitiese un triunfo revolucionario como el ocurrido el 19 de julio de 1979.

1.5.- Una oportunidad perdida.

Las posibilidades reales de que se produjese el derrocamiento revolucionario de la dictadura orteguista, estuvieron presentes durante los meses de mayo y junio, el momento más álgido de la movilización popular, cuando la dictadura estaba acorralada. Las ilusiones que la ACJD mantuvo en el Dialogo Nacional, le dio el tiempo necesario a la dictadura para recuperar el aliento.

En la fase de ascenso revolucionario, los empresarios del COSEP, AMCHAN y FUNIDES fueron muy prudentes. Presionados por las masas, fueron obligados a convocar a paros nacionales de un solo día, verdaderos lockouts. En total hubo 3 paros nacionales: miércoles 13 de junio, viernes 13 de julio y viernes 7 de septiembre. Los dos primeros paros fueron convocados en momentos de ascenso, pero el ultimo ya fue convocado en el periodo de resistencia, cuando la dinámica de las masas tendía a disminuir

Debido a la ausencia de una dirección revolucionaria, reconocida por las masas (como lo fue el FSLN en 1979), los paros nacionales se diluían en la nada. En la etapa de ascenso revolucionario, la convocatoria a un paro nacional indefinido, una verdadera huelga general, hubiera cambiado radicalmente la situación, en los momentos en que la dictadura estaba a la defensiva.

Y vino lo inevitable: el aplastamiento de la insurrección desarmada, que no contó con el apoyo material o militar de un solo gobierno. La desaparición de tranques y barricadas marcó el inicio de una fase de reflujo gradual del movimiento de masas. Después de haber realizado la labor sucia, la dictadura disolvió a los grupos paramilitares, pero la represión continuó, esta vez desde las instituciones del Estado.

2.- Se inicia el reflujo del movimiento de masas

Las masacres y la represión generalizada, ante la pasividad de la comunidad internacional, obligó a las masas a replegarse. Se abrió una nueva fase de retroceso de la movilización.

2.1.- Represión generalizada y repliegue de las masas

Una vez que la dictadura recuperó el control de los pueblos y ciudades insurrectos, la represión se centró contra los movimientos sociales agrupados en la Articulación, que eran el ala más beligerante de la movilización popular.

Como los estudiantes universitarios fueron el detonante de la insurrección desarmada, la dictadura orteguista centró la represión contra la dirigencia estudiantil universitaria, que ha sido la vanguardia de la lucha democrática. Una parte de la vanguardia estudiantil y popular ha sido asesinada, otra parte está en el exilio, otra parte ha sido capturada y procesada penalmente en juicios amañados impulsados por la dictadura.

En los últimos meses, dos movimientos sociales han sido duramente golpeados o desarticulados: las nuevas organizaciones estudiantiles universitarias que surgieron después de la masacre del 19 de abril, y el Movimiento Campesino anticanal que durante años fue el baluarte de la movilización popular.

El descenso de la actividad de las masas fue gradual, pero con una tendencia muy marcada hacia la desmovilización total. Aun así, hubo pequeñas marchas que fueron nuevamente atacadas a balazos, hasta que finalmente cesó la movilización popular. Ortega impuso a sangre y fuego un cambio en la correlación de fuerzas, iniciándose la fase de retroceso en la movilización popular.

Para consolidar los avances obtenidos, en el mes de octubre la dictadura prohibió cualquier tipo de manifestación pública, violentando abiertamente las libertades democráticas consagradas en la Constitución. Las personas que en solitario marcharon con banderas de Nicaragua para desafiar a la dictadura, fueron encarceladas y enjuiciadas bajo la acusación de terrorismo.

2.2.- Crisis de la ACDJ, golpes a la Articulación y surgimiento de la UNAB

El reflujo de la movilización popular metió en crisis a los movimientos sociales que participaban en la ACDJ, golpeando con especial énfasis a la Articulación, ya que está organización registrada la mayor cantidad de dirigentes muertos, presos o en el exilio.

Incluso, el retroceso de las masas hizo también retroceder a los empresarios del bloque COSEP-AMCHAM-FUNIDES a las posiciones originales del "aterrizaje suave". En estas condiciones, a inicios de octubre se conformó la Unidad Nacional "Azul y Blanco" (UNAB) como una alianza entre la ACDJ y la Articulación, más otros grupos independientes. Los empresarios se negaron a participar, por considerar que estaba dominada por "grupos de izquierda" y en los hechos boicotearon cualquier posibilidad de realizar acciones conjuntas para desarrollar la movilización popular. La UNAB nació moribunda, en medio de la desmovilización popular.

3.- La estrategia de la dictadura Ortega-Murillo: prolongar el conflicto para crear una nueva negociación favorable

En estos meses de lucha la estrategia de la dictadura Ortega-Murillo ha sido muy clara. Durante el periodo de ascenso revolucionario de las masas, se colocó a la defensiva y convocó a Dialogo Nacional, para entretener a la ACDJ. Después, cuando lo consideró oportuno, rompió el Dialogo Nacional e inició una brutal contra ofensiva militar contra los

tranques y barricadas, masacrando a los luchadores populares.

A partir del aplastamiento de la insurrección desarmada, la dictadura Ortega-Murillo considera que puede resistir hasta el año 2021, cuando termina el periodo presidencial. A pesar que hace concesiones parciales, aquí o allá, en el fondo procura resistir el mayor tiempo posible para reanudar la negociación política en condiciones más favorables.

La dictadura trabaja afanosamente para crear condiciones para una nueva versión de Dialogo Nacional, pero esta vez con los viejos partidos políticos aliados del régimen y directamente con las cámaras empresariales, apartando a organismos como la ACDJ, la Articulación y la UNAB. Sin la presencia de las masas en las calles, estas fuerzas reaccionarias pretenden negociar reformas mínimas al régimen político para crear un orteguismo sin Ortega-Murillo.

Pero la instalación de una nueva mesa de negociaciones no es asunto fácil. Recientemente el informe de la CIDH catalogó las masacres en Nicaragua como "crímenes de lesa humanidad". Las sucesivas condenas de organismos internacionales por violaciones a los derechos humanos, crean un panorama adverso a la dictadura Ortega-Murillo, a pesar del triunfo parcial obtenido al haber aplastado la insurrección desarmada. La dictadura está aislada, apoyada únicamente por los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP).

3.1.- La base económica de la resistencia dictatorial: las interrelaciones con el ALBA-TCP

¿Cuál es el origen de la enconada resistencia de la dictadura Ortega-Murillo para reformar el régimen político? En estos 11 años de gobierno sandinista, se produjo un acelerado proceso de acumulación originaria y extraordinaria de capital, a partir del convenio petrolero con Venezuela, que redituó en un monto de alrededor de 5,000 millones de dólares.

Para manejar discrecionalmente semejante cantidad de dinero, Ortega-Murillo asaltaron todas las instituciones del Estado, y establecieron primero un régimen bonapartista y después una dictadura cuyos principales sostenes son el Ejército y la Policía Nacional. Esta última dejó de ser un organismo civil para convertirse en un pequeño ejército paralelo, encargado de ejecutar la represión contra el pueblo.

Con ese cuantioso capital proveniente del acuerdo petrolero con Venezuela han podido montar los monopolios en energía e hidrocarburos, así como otras redes de empresas, Ortega-Murillo.

La dictadura Ortega-Murillo tiene participación en un enorme conglomerado de negocios transnacionales que se han creado bajo la sombra del ALBA-TCP, cuyo principal sostén es la riqueza petrolera y minera de Venezuela.

El ALBA-TCP fue creado por Hugo Chávez en el año 2004 como una alternativa ante el ALCA promovido por Estados Unidos. El ALBA-TCP fue justificado con el discurso y la ideología latinoamericanista del libertador Simón Bolívar.

Sin embargo, lo que ocurrió en la realidad fue algo diferente. De la misma que a nivel interno de Venezuela, el chavismo utilizó la riqueza petrolera para consolidar su base social y su clientela electoral, a nivel latinoamericano los convenios petroleros fueron utilizados para atraerse aliados, especialmente a los Estados más pobres o pequeños.

Venezuela es altamente dependiente de los precios del petróleo y de las compras de productos en el extranjero. El chavismo en vez de modificar ese esquema de dependencia del petróleo y de subsidiar su agricultura y su propia industrialización, prefirió montar una red de negocios con la burguesía de otros países, ayudando a crear su propia "Boliburguesía".

El subsidio petrolero a los países que conforman parte del ALBA-TCP forma parte de esa red de negocios transnacionales, por medio de la cual la Boliburguesía ha sacado enorme cantidad de recursos de Venezuela, invirtiendo en otros países, como Cuba y Nicaragua, países seguros donde sus inversiones teóricamente no corren ningún riesgo. En la última década se ha producido una interrelación económica entre los países que forman parte del ALBA-TCP. Los intereses económicos de Venezuela en Nicaragua, son cruciales tanto para la Boliburguesia como para la burguesía sandinista. La interrelación económica se transforma en interrelación o dependencia política.

Un abrupto cambio de gobierno alteraría este esquema de negocios, por ello la dictadura Ortega-Murillo cierra filas con Venezuela, y no se atreve a realizar una negociación por separado que ponga en peligro la red de negocios transnacionales creados bajo la sombra del ALBA-TCP.

3.2. Las sanciones de Trump pretenden retomar la iniciativa política e incidir en la conformación de un nuevo gobierno

Desde el estallido revolucionario de abril del 2018 en Nicaragua, la administración Trump manejó una política prudente, dándole tiempo a la dictadura para que iniciase la reforma del régimen político.

Pero la dinámica de los acontecimientos en Nicaragua, aceleró los planes del imperialismo norteamericano. El pasado 1 de noviembre del 2018, John Bolton, asesor del Consejo de Seguridad Nacional (NSC) del gobierno de Estados Unidos, anunció nuevas sanciones económicas contra dos países del ALBA-TCP, específicamente contra Cuba y Venezuela, pero hizo una excepción con Nicaragua, abriendo un compás de espera. Tres semanas después, Donald Trump firmó una Orden Ejecutiva, catalogando al gobierno de Nicaragua como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, sancionando a la vicepresidenta Rosario Murillo y a Néstor Moncada Lau, asesor de seguridad de Daniel Ortega. Las sanciones simbólicas contra el anillo de acero de Daniel Ortega, marcaron un giro en la política hacia Nicaragua.

Después de dos años y medio de discusión en el Congreso de Estados Unidos, el consenso bipartidista permitió finalmente la aprobación de la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua 2018, conocida como NICA ACT, la que acaba de ser sancionada por Donald Trump. Esta ley tiene efecto extraterritorial, obliga a los delegados de Estados Unidos en organismos multilaterales, como el BID y el Banco Mundial, a bloquear préstamos a Nicaragua. Además, permite enjuiciar y castigar en los tribunales norteamericanos a los funcionarios nicaragüenses señalados de corrupción y violación a los derechos humanos.

La administración Trump tiene ahora dos poderosas armas para presionar al gobierno Ortega-Murillo, con el objetivo de forzarlo a que acepte una negociación política que permita adelantar las elecciones.

Es importante señalar que la Orden Ejecutiva de Trump y la NICA ACT no se produjeron cuando estaba la fase de ascenso revolucionario, o cuando Ortega estaba asaltando los tranques, sino que fueron creadas cuando existe un retroceso del movimiento de masas en Nicaragua, es decir, cuando ha pasado el peligro que las masas pudieran derrocar a la dictadura y establecer su propio gobierno. El imperialismo norteamericano comienza a intervenir abiertamente cuando ha pasado el peligro de un triunfo revolucionario.

El principal objetivo de estas sanciones, o de las que puedan venir en el futuro, es que Estados Unidos retome la iniciativa política, incida sobre las fuerzas opositoras, incluidos los movimientos sociales, para influir en la conformación de un nuevo gobierno, sea por medio de elecciones anticipadas o por un golpe de Estado o autogolpe. Las presiones de Estados Unidos se centran sobre el Ejército y la Policía Nacional, para que estos abandonen a la pareja presidencial y con ello permitan establecer una negociación política.

3.3. La dictadura responde intensificando la represión

Como la relación del FSLN con las masas se ha debilitado, la dictadura Ortega-Murillo ya no pueden usar con éxito el discurso antiimperialista y por eso responde a las sanciones de Estados Unidos intensificando la represión contra los movimientos sociales, revocando arbitrariamente la personalidad jurídica de organismos como CISAS, CENIDH, CINCO, POPOL-NA y otros, asaltando y silenciando los medios de comunicación independientes, (Confidencial, Canal 10, Canal 100% noticias) a quienes acusa de ser aliados del imperialismo norteamericano. Incluso, la dictadura expulsó a la CIDH, al GIEI y al MESENI, por los demoledores informes sobre violación de derechos humanos.

Desde el mes de julio en adelante en Nicaragua se vive un Estado de Excepción en los hechos, por medio del cual se han anulado progresivamente los derechos constitucionales y las libertades democráticas, con el objetivo de evitar un reinicio de las movilizaciones.

3.4. El ajuste sigue pendiente

Bajo esta tensa situación de represión generalizada, continúa exacerbándose la crisis económica, situación que ya venía produciéndose antes de la insurrección de abril, pero que se ha agudizado desde entonces. Todos los indicadores económicos están a la baja.

Sigue pendiente la solución al desfinanciamiento del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). Los recortes al presupuesto nacional anuncian nuevos despidos en sector público, y la quiebra generalizada de pequeños negocios, lo que elevará los niveles de desempleo Las inevitables medidas de ajuste de la economía puede desencadenar un nuevo estallido social.

3.5.- Democracia, dictadura y antiimperialismo

No es una casualidad que Nicaragua y Venezuela están siendo gobernados por regímenes políticos similares, que evolucionaron del bonapartismo a dictaduras. Al disminuir los ingresos de la renta petrolera, el PSUV y su aliado el FSLN, ya no se apoyan en la movilización de masas, tienen pocas migajas que repartir, sino en las fuerzas armadas que han reprimido rebeliones populares en sus respectivos países.

Los gobiernos dictatoriales de Nicaragua y Venezuela, ya no representan los intereses del conjunto de la nación, sino los intereses específicos de sectores burgueses emergentes, que para mantener y defender los procesos de acumulación de capital han tenido que limitar las libertades democráticas y recurrir a la dictadura.

Entonces, se nos presenta una terrible ironía de la historia: gobiernos supuestamente "socialistas" y de "izquierda" reprimen salvajemente el descontento popular, echándole la culpa al imperialismo norteamericano de promover las "guarimbas" en Venezuela y un "golpe de Estado" en Nicaragua.

Bajo ese esquema, el descontento y las rebeliones sociales no son producto de la crisis económica y de la ausencia de libertades democráticas, sino que son fraguadas por un complot perverso del imperialismo norteamericano. Esta teoría de la conspiración, que repite una buena parte de los partidos reformistas de izquierda (que en su mayoría reciben fondos "solidarios" del chavismo) no solo justifica y glorifica a los gobiernos dictatoriales de Nicaragua y Venezuela, sino que embellece la postura hipócrita del imperialismo al cederle plenamente las banderas de la democracia.

Esta visión simplista y maniquea del chavismo y del sandinismo, pretende encubrir una contradicción fundamental: la lucha antimperialista es esencialmente una lucha democrática. Es absolutamente falso que el antimperialismo niega la lucha por la democracia. Al contrario, están íntimamente ligadas. Entre más amplia es la democracia, las masas tienen mayores posibilidades de desarrollar luchas y una movilización independiente, no solo para defender sus intereses particulares y auto determinarse ante la burguesía, sino para constituirse como la vanguardia de la nación oprimida, en la lucha por conquistar y sostener la verdadera independencia política en relación al imperialismo.

La crisis del sistema capitalista en Nicaragua y Venezuela niega los derechos democráticos, por eso la defensa de los mismos se transforma en una lucha contra el sistema, adquiere un carácter transicional.

Sin lugar a dudas, cada vez que se produzcan revueltas populares, el imperialismo intervendrá de múltiples formas para pescar en rio revuelto. La administración Trump pretende convertirse en campeona de la defensa de las libertades y derechos democráticos, con el claro objetivo de debilitar a los gobiernos de Nicaragua y Venezuela, con el propósito de sustituirlos por gobierno cipayos.

Otro error que comete la izquierda reformista es amarrar la defensa de la independencia política con el destino de los actuales gobiernos dictatoriales en Nicaragua y Venezuela. La lucha antiimperialista no depende de la suerte de alguna dictadura, sino de la movilización independiente de las masas. Darle la espalda a las masas que luchan por sus derechos democráticos, debilita la lucha antiimperialista.

3.6. Las ineficaces sanciones de Trump

Las sanciones imperialistas de Estados Unidos, producidas en diferentes momentos, contra altos funcionarios del gobierno de Venezuela y de Nicaragua, abren un debate en torno a cuál debe ser la actitud de los revolucionarios.

En el caso particular de Nicaragua, la Orden Ejecutiva de Trump y la NICA ACT se limitan a restringir préstamos internacionales y a sancionar a altos funcionarios de gobierno. Estas últimas son medidas simbólicas y de poco efecto práctico. La reducción de préstamos puede tener efectos en la economía, pero no pone en peligro de caída inmediata a la dictadura. El 95% del presupuesto nacional de Nicaragua, se recauda de los grandes contribuyentes, es decir, de los grandes grupos económicos, quienes siguen pagando puntualmente los impuestos.

Los socialistas centroamericanos repudiamos las ineficaces sanciones de la administración Trump y la vigencia de la NICA ACT porque crean la ilusión nefasta que no es la lucha de las masas en las calles sino Estados Unidos quien va a resolver el problema, y porque en la realidad no ayudan a la lucha democrática, sino que solo pretenden tener mayor injerencia política para inmiscuirse y arrebatar a las masas la capacidad de decidir democráticamente la composición de un futuro gobierno.

La solidaridad internacional es necesaria, pero no debe confiarse en la diplomacia burguesa, sino en la desinteresada solidaridad de los sindicatos y demás movimientos sociales. Necesitamos medidas reales

que ayuden a las masas en resistencia a derrocar a la dictadura, como la ruptura de relaciones diplomáticas, el cese de cualquier abastecimiento militar, ejercer presión internacional para la liberación de los más de 700 presos políticos, y brindar apoyo material a las víctimas de la represión y a las organizaciones que luchan contra la dictadura.

4.- Organizar la resistencia popular hasta derrocar a la dictadura y convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.

A veces el camino de la victoria está empedrado de derrotas. La vanguardia estudiantil y popular que ha estado al frente de la movilización, y que se ha visto obligada a replegarse por la represión, debe sacar las lecciones de estos 8 meses de lucha.

1.- Debemos organizar y crear condiciones para la convocatoria de un Paro Nacional Indefinido, que no dependa de la voluntad de los empresarios del COSEP-ANCHAM y FUNIDES. Para frenar la represión y lograr la liberación de los presos políticos, este paro debe ser convocado desde abajo.

2.- Para ello debemos superar la etapa de dispersión, y organizar la resistencia popular ante la brutal represión de la dictadura, rescatando la experiencia de los Comités Cívicos, en todos los barrios y centros de trabajo, de manera tal que se conviertan en un aglutinante de la comunidad.

3.- Antes las maniobras de los empresarios y del gobierno de Estados Unidos que pretenden negociar un orteguismo sin Ortega, y ante la ausencia de una dirección revolucionaria centralizada, los movimientos sociales aglutinados en la Articulación tienen el desafío de crear una alternativa política que haga frente a las nuevas versiones del aterrizaje suave que ya se están cocinando.

4.- La principal tarea del momento sigue siendo el derrocamiento de la dictadura, por la vía de la movilización popular, a través de un gran paro nacional indefinido, y la convocatoria inmediata de una Asamblea Nacional Constituyente, libre y soberana.

Centroamérica, 22 de diciembre del 2018

Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)
Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)

IX.-

¿CÓMO Y POR QUÉ LA DICTADURA ORTEGA-MURILLO LOGRÓ DERROTAR LA INSURRECCIÓN DESARMADA? ¿A DÓNDE VAMOS?

Este 19 de abril del 2019 se cumplió un año del estallido de la insurrección estudiantil y popular en Nicaragua. Como un modesto homenaje a las compañeras y compañeros asesinados por la dictadura, sometemos a consideración de la vanguardia revolucionaria en Nicaragua y resto de Centroamérica, el siguiente análisis que contiene los elementos esenciales de un balance sobre todo lo ocurrido.

1.- El inicio de la insurrección estudiantil y popular

El 19 de abril del 2018, tropas especiales de la Policía Nacional (PN), por órdenes directas de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, desataron una masacre contra los estudiantes universitarios que protestaban contra las reformas a la seguridad social. El repudio a esta masacre dio origen a una poderosa insurrección espontanea en Managua y en las principales ciudades del país.

La situación política cambio drásticamente. El gobierno Ortega-Murillo, que anteriormente ejercía el control absoluto, había sido mortalmente herido. Durante varios días se produjeron batallas campales alrededor de la Universidad Politécnica (UPOLI), Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), Universidad Nacional Agraria (UNA), Universidad de Ingeniería (UNI) y en casi todos los recintos

universitarios en todos los departamentos del país.

La insurrección, iniciada por los estudiantes, fue fortalecida con la participación de los jóvenes de los barrios marginales. Después de varios días de combates callejeros, defendiéndose con piedras y morteros de las balas asesinas, la insurrección juvenil y popular obligó a las tropas de la PN a replegarse. Hasta ese momento se tuvo conocimiento de la magnitud de la brutal masacre: mas de 60 jóvenes asesinados, centenares de heridos, destrucción por todos lados.

La característica esencial de esta insurrección juvenil y popular fue la espontaneidad y la carencia de armamento, es decir, fue un levantamiento o insurrección desarmada.

2.- Surgen nuevas organizaciones estudiantiles

El 19 de abril del 2018, Nicaragua despertó del letargo político. En las universidades, anteriormente controladas férreamente por la Juventud Sandinista-19 de Julio (JS-19), surgieron nuevos grupos estudiantiles que inmediatamente se dieron a la tarea de luchar contra la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN).

Esta nueva vanguardia estudiantil no tenía ningún nexo con partido político alguno, tampoco tenia nexos con las anteriores generaciones de dirigentes estudiantiles que habían sido aplastados por la JS-19. Fue un fenómeno altamente progresivo, porque representaba una ruptura tajante contra la JS-19 y UNEN, pero estuvo marcado por la dispersión y la confusión en torno a las tareas que debía enfrentar.

No había dirigencia estudiantil experimentada, ni visión política clara, tuvieron que comenzar desde cero. En ese proceso, se guiaron por la emotividad y la espontaneidad, sin una visión clara del monstruo que debían enfrentar, el cual se había replegado temporalmente para reagruparse y reiniciar una ofensiva contra la nueva vanguardia estudiantil que había nacido al calor de la insurrección de abril del 2018.

Salvo las experiencias de la UNA y UNI, quienes convocaron a la realización de asambleas estudiantiles, la mayoría de los nuevos grupos estudiantiles actuaron con el apoyo de las masas estudiantiles, pero sin promover una nueva organización o estructura estudiantil.

Aun con las debilidades anteriormente señaladas, surgieron grupos como Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), Movimiento Estudiantil

19 de Abril, Movimiento Universitario 18 de Abril, agrupaciones de la UNA, y otros que conformaron la Coalición Universitaria y la Coordinadora Democrática por la Justicia y la Democracia (CUDJ), entre otras.

3.- Surgen nuevas formas de autoorganización popular

El mismo fenómeno que ocurrió en las universidades, también ocurrió entre los sectores populares. Surgieron grupos de autoconvocados por todos lados, quienes organizaban masivas marchas casi todos los días. Estos grupos de autoconvocados, igual que el sector estudiantil, actuaba de manera dispersa y sin una centralización política u organizativa.

Alrededor de las marchas de protesta, se fueron consolidando algunas de estas organizaciones nuevas, de autoconvocados, pero no lograron tener una centralización a nivel nacional

4.- El reacomodo de los empresarios

La insurrección de abril del 2018 asustó a los empresarios del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), y de la Cámara de Comercio Americana Nicaragüense (AMCHAM), quienes se distanciaron del gobierno Ortega-Murillo y renegaron hipócritamente de la política de "alianzas y consensos" que aplicaron por mas de 10 años, lo que permitió la consolidación de una nueva dictadura en Nicaragua.

5.- Los llamados al Dialogo Nacional

Mientras ocurrían marchas casi todos los días, y aunque la PN se replegó temporalmente, continuaron los asesinatos selectivos de los francotiradores contra los manifestantes.

Pero mientras la marea revolucionaria subía, el mismo Daniel Ortega hizo llamados a un Dialogo Nacional, que rápidamente fue aceptado por los empresarios, quienes en todo momento se inclinaron por un "aterrizaje suave", es decir, por una transición ordenada que evitara el estallido de la revolución social. La burguesía nicaragüense no olvida la experiencia de 1979, cuando perdió el control de la situación.

6.- El surgimiento de la Alianza Cívica y la Articulación.

Bajo la influencia de la Iglesia Católica y de los empresarios del COSEP y de AMCHAM, también con la participación de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo (FUNIDES), se conformó la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD). Para tener mayor credibilidad en el momento de las negociaciones, los empresarios tuvieron que incorporar a las nuevas organizaciones estudiantiles que habían nacido, y otras como el movimiento campesino anti canal, creando la sensación de una solidad unidad nacional. Pero la agenda de negociación de la ACJD estaba determinada por los intereses de los empresarios, quienes en todo momento deseaban terminar con la agitación social.

A inicios de mayo del 2018, también se creó la Articulación de Movimientos Sociales y Organismos de la Sociedad Civil, conocida como Articulación, que agrupó a la mayoría de ONGs y movimientos sociales de autoconvocados.

7.- El fracaso del primer Dialogo Nacional

El primer Dialogo Nacional fue instalado el 16 de Mayo, con grandes expectativas de cambio por parte de la población. No obstante, el Dialogo Nacional fue una maniobra dilatoria de la dictadura para ganar tiempo.

El 16 de junio el Dialogo Nacional fue suspendido, y esta fecha marcó el inicio de la ofensiva militar contra los tranques y barricadas que habían florecido en toda Nicaragua.

8.- La ofensiva militar contra los tranques y barricadas y el aplastamiento de los organismos embrionarios de poder popular

Cuando se inició el Dialogo Nacional los tranques y barricadas habían semiparalizado el país. La dictadura sabia perfectamente que ello podía significar su caída, y por eso suspendió el Dialogo Nacional e inició una brutal ofensiva militar contra los tranques y barricadas.

En este proceso de insurrección popular en las ciudades de Masaya, Jinotepe, Nagarote, Matagalpa y Jinotega, solo para citar los casos mas emblemáticos, se constituyeron organismos locales de poder popular

que controlaban una parte de sus respectivos territorios municipales. Este fue el pico organizativo mas alto de la insurrección popular. Pero estos organismos embrionarios de poder popular nunca se coordinaron entre sí. Esta fue una enorme debilidad política, que facilitó la ofensiva paramilitar, ya que la columna volante que el gobierno Ortega-Murillo logró montar, comenzó a destruir los organismos embrionarios de poder popular en cada municipio, uno por uno, hasta destruirlos a todos.

Alrededor de los tranques se organizó la población de los poblados aledaños, organizando comedores, roles de vigilancia, etc. El surgimiento de barricadas en los barrios orientales de Managua, eran un grave peligro para la dictadura. Por ello, a pesar de las condenas simbólicas de los organismos internacionales, los ataques militares y el terror no se detuvieron ante nada

9.- ¿Puede triunfar una insurrección desarmada?

Toda insurrección implica una lucha de masas por tumbar al gobierno de turno y tomar en sus manos el poder. Como hemos analizado, la dinámica de la insurrección del 2018 fue esencialmente sin armas, es decir, desarmada.

La campaña de propaganda del COSEP y del diario La Prensa fue que la "insurrección cívica" no debía caer en la tentación de la lucha armada. Esta fue otra enorme debilidad. Mucha gente creyó que bastaba la lucha cívica para derrotar a la dictadura.

No obstante, la brutal represión antes y durante la ofensiva militar contra los tranques, obligó muchos jóvenes y luchadores populares a crear mecanismo de autodefensa. Ante la falta de armas de guerra, los morteros y las piedras fueron las armas utilizadas en la autodefensa. Era necesario la creación de milicias populares de autodefensa, para resistir los embates militares de la dictadura. La espontaneidad y la dispersión de la lucha popular, sucumbieron ante el ataque militar sistemático, programado y centralizado de la dictadura

10.- Los paros nacionales a cuentagotas

Cuando la correlación de fuerzas comenzaba a cambiar por la embestida militar criminal de la dictadura, los empresarios del COSEP convocaron el primer paro nacional de 24 horas para el día 14 de junio. Dos días después se inició la ofensiva militar que terminaría el 19 de

julio del 2018. Mientras se desarrolló la ofensiva militar, el COSEP y la ACJD guardaron profundo silencio, emitieron comunicados de condena, pero no hicieron absolutamente nada por detener la mano criminal.

El segundo paro nacional fue convocado el día 13 de julio, cuando la dictadura había consolidado su triunfo militar. El tercer y ultimo paro nacional fue convocado el 7 de septiembre ante la ola de críticas e indignación popular por la indolencia de los empresarios.

Los paros nacionales a cuenta gotas no surtieron ningún efecto. A partir de septiembre el COSEP y la ACJD intensificaron una absurda campaña en contra de los paros nacionales, abogando por los paros de consumo, distrayendo y engañando al pueblo, ocultando con esta modalidad de "nueva lucha cívica" la impotencia y el temor a enfrentar a la dictadura, que había logrado destruir los organismos que había creado la insurrección popular.

11.- La venganza de la dictadura: la destrucción de los movimientos sociales

Después del acto del 19 de julio del 2018, se inició la venganza de la dictadura contra el movimiento estudiantil y contra el movimiento campesino. Este ultimo había logrado organizar marchas importantes contra el canal interoceánico en el periodo anterior a abril del 2018.

La venganza consistió en la captura, encarcelamiento y procesamiento penal de los dirigentes estudiantiles, del movimiento campesino y los luchadores populares autoconvocados, a partir de la aprobación de la nueva ley contra el terrorismo.

Una parte de la dirigencia fue muerta durante la ofensiva militar contra los tranques y el asalto a los recintos universitarios tomados, otra parte fue forzada a marchar al exilio y otra parte fue encarcelada. El resultado es trágico: lo que fue construido después de abril del 2018, ya estaba casi liquidado después de agosto del 2018. En tres meses la dictadura había logrado evitar no solo su caída, sino que había destruido y desarticulado a los liderazgos locales que se formaron con la insurrección desarmada.

12.- ¿Cómo fue posible ese triunfo militar de la dictadura?

Las masas salieron a pelear, pero fueron obligadas a retroceder por las balas asesinas. Esta parte requiere una explicación de fondo, realizar un balance de todo lo ocurrido.

En primer lugar, la explicación central es que no había una conducción política centralizada, en todo el proceso predominó el espontaneísmo, la autoorganización y la dispersión. En cambio, la insurrección desarmada se enfrentó en todo momento a una conducción centralizada y con experiencia militar proveniente de la guerrilla antes de 1979. Y como era de esperarse, una minoría de paramilitares, mejor armados y organizados, terminó imponiéndose por la fuerza contra la mayoría del país, que lucha de manera desorganizada y espontanea.

En segundo lugar, muchos de los movimientos sociales, estudiantiles y campesinos, tuvieron confianza política en la ACJD y en los empresarios del COSEP, creyeron que bastaba solo presionar pacíficamente en las calles para obtener la renuncia del gobierno Ortega-Murillo, cuando en realidad estos siempre conspiraron para superar el momento difícil y cambiar la correlación de fuerzas.

A pesar que la Articulación tenía un planteamiento mucho más claro y consecuente que la ACJD, no logró convertirse en una dirección política ampliamente reconocida por las masas en lucha. A nivel público, quien aparecía como conducción era la ACJD. En pocas palabras, no había una conducción política revolucionaria, que enfrentara y combatiera la política suicida de la ACJD y de los empresarios del COSEP. Y quienes lo hicimos éramos minoría.

En tercer lugar, excepto la consigna de la renuncia del gobierno Ortega-Murillo, que por cierto era bien recibida por la población, los luchadores populares de cada municipio, así como los estudiantes de cada recinto, o los grupos en los tranques, no encontraron el nexo que los unía a todos.

La conducción política en el periodo de ascenso revolucionario (abril-junio) fue la ACJD y esta, por el control del COSEP, nunca se planteo el derrocamiento revolucionario de la dictadura, sino la negociación a través del llamado "aterrizaje suave". Hizo fata un programa y consignas que unificaran la dispersa lucha popular a nivel local, hasta crear una coordinadora nacional de lucha popular que se planteara el objetivo de constituirse en gobierno provisional. Se habló mucho de un

gobierno provisional, pero los empresarios tenia miedo, y ni la ACJD ni la Articulación hicieron una propuesta concreta de gobierno provisional.

Todos los planteamientos quedaron en meras intenciones, mientras la dictadura disolvía a balazos los organismos que la insurrección desarmada había creado en el periodo abril-junio del 2018.

13.- Una fase de retroceso y resistencia popular

A partir de agosto del 2018 se inició una fase de retroceso y descenso de la lucha popular. De manera paulatina y sistemática, la dictadura comenzó a recuperar gradualmente el control de la situación, hasta lograr imponer la desmovilización total, prohibiendo en los hechos cualquier manifestación o marcha en su contra.

Ha habido muchos intentos de retomar nuevamente las calles, pero los marchistas son dispersados por la represión policial.

14.- La aquiescencia hipócrita de Estados Unidos y la UE

Durante el periodo de ascenso revolucionario (abril-junio del 2018) se produjeron la masiva violación de derechos humanos en Nicaragua. Desde el inicio de la crisis, las potencias imperialistas de Estados Unidos y los gobiernos de la Unión Europea (UE) se inclinaron por el dialogo y la negociación, es decir, porque fuera el propio Ortega quien impulsara las reformas democráticas.

Después de las masacres de junio y julio, y del asalto militar a los tranques, Estados Unidos y la UE endurecieron el discurso (incluso Estado Unidos aplicó algunas sanciones individuales a funcionarios orteguistas), hubo resoluciones simbólicas en la OEA, pero ni una sola medida concreta que ayudara a detener las masacres.

Una vez que Ortega se impuso a balazos, vino el silencio sepulcral. Todo indica que existió un acuerdo secreto en los hechos, al tolerar (con algunas lágrimas de cocodrilo) que Ortega-Murillo impusiesen el orden y evitase el colapso del Estado, como condición previa a cualquier negociación.

Una vez que Ortega-Murillo impusieron el orden, la administración Trump ha redoblado las presiones para forzar una negociación interna.

Para ello, Trump ha utilizado sus poderes ejecutivos, sancionando a mas funcionarios orteguistas, entre ellas Rosario Murillo y su hijo Laureano Ortega Murillo.

15.- El surgimiento de la UNAB

A inicios de octubre del 2018, se constituyó la Unidad Nacional "Azul y Blanco" (UNAB) como una alianza entre la ACDJ y la Articulación, más otros grupos independientes. La ACJD se había desgatado políticamente, y la UNAB apareció como una nueva alternativa unitaria, en momentos difíciles, que posibilitaría retomar las calles otra vez. Pero los empresarios no estaban interesados, y se negaron a participar directamente en la misma, por considerar que había mucha influencia de los grupos de izquierda, en una clara alusión a los movimientos sociales agrupados alrededor de la Articulación.

En el acta de constitución de la UNAB, la Articulación le cedió a la ACJD la representación en un futuro Dialogo Nacional, y de esta manera la ACJD, controlada por los empresarios, quedó como la interlocutora valida para negociar con el gobierno Ortega-Murillo.

16.- La estrategia de la dictadura Ortega-Murillo: prolongar el conflicto para crear una nueva negociación favorable

A partir del aplastamiento de la insurrección desarmada, sin oposición en las calles, la dictadura Ortega-Murillo trabaja afanosamente para resistir al máximo, para crear mejores condiciones para una negociación. La posibilidad de sobrevivir hasta el 2021 son remotas, si tomamos en cuenta el aislamiento internacional y el enorme descontento social existe en Nicaragua. Aunque logró imponerse militarmente, no ha podido reconstruir su alianza con los empresarios y las condiciones económicas y sociales transforman al país en un polvorín que puede estallar en cualquier momento.

Estas dificultades reales obligaron a la dictadura a reiniciar una segunda versión del Dialogo Nacional, con una ACJD mas reducida, sin la presencia de los movimientos sociales que han sido desarticulados, pero que después de la aprobación de dos acuerdos, volvió a entrar en crisis. La dictadura ha aceptado liberar a los presos políticos en 90 días y a respetar los derechos fundamentales de la Constitución, pero no cumple en aras de sellar un acuerdo global sobre temas de reformas

electorales y adelanto de elecciones, y el espinoso tema de la justicia.

Estos altos y bajos en las negociaciones marcan, no obstante, una tendencia general hacia una salida electoral a finales del 2019 o mas tardar a mediados del 2020. Todos comienzan a ponerse de acuerdo poco a poco en torno a la necesidad de impulsar las reformas democráticas para "restaurar la democracia".

17.- Discutir un balance que permita construir una alternativa política

No hay dudas que la administración Trump y los empresarios del COSEP aspiran a reformar a la dictadura, para regresar al régimen existente en 2006. De nosotros dependerá si la sangre derramada, y el sufrimiento vivido, servirá solo para hacer reformas cosméticas al régimen político, o al contrario seguimos la lucha para impulsar cambios democráticos profundos que Nicaragua necesita, movilizando al pueblo en la perspectiva inmediata de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, libre, democrática y soberana, que reorganice Nicaragua en beneficio de las masas populares.

Por ello, el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llama a todos los luchadores juveniles y populares de Nicaragua a construir una nueva alternativa política revolucionaria, que permita enfrentar los planes de la administración Trump y de los empresarios que pretenden instaurar un orteguismo sin Ortega (o con Ortega)

Centroamérica, 27 de abril del 2019

Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)
Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)

Publicación del Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)

EL SOCIALISTA Centroamericano

COMENTARIOS, SUGERENCIAS Y SUSCRIPCIONES:

El Socialista Centroaméricano: elsoca@elsoca.org
Guatemala: psoca_guatemala@elsoca.org
El Salvador: psoca_salvador@elsoca.org
Honduras: psoca_honduras@elsoca.org
Nicaragua: psoca_nicaragua@elsoca.org
Costa Rica: psoca_costarica@elsoca.org

www.elsoca.org